



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

# **EL IMPACTO DE LA PAZ EN LA ECONOMÍA: EL CASO DE COLOMBIA**

Autor: Natalia Escudero Ladrón de Guevara

Director: Almudena Baanante Gismero

Natalia  
Escudero  
Ladrón de Guevara

# EL IMPACTO DE LA PAZ EN LA ECONOMÍA: EL CASO DE COLOMBIA



# TRABAJO DE FIN DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

## El impacto de la paz en la economía colombiana

### Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	5
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	6
ESTADO DEL ARTE	8
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	12
METODOLOGÍA	13
ANÁLISIS	14
1. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA	14
2. COSTES ECONÓMICOS DEL CONFLICTO	17
I. <i>Costes directos</i>	18
II. <i>Costes indirectos</i>	23
3. EL PAPEL ECONÓMICO DE LOS GRUPOS ILEGALES	27
4. MEDIDAS ECONÓMICAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO	30
I. <i>Reforma Rural Integral</i>	30
II. <i>Solución al problema de las drogas ilícitas</i>	33
5. COMPARACIÓN DEL CASO COLOMBIANO CON OTROS PROCESOS DE PAZ SIMILARES	34
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
BIBLIOGRAFÍA	42
ANEXOS	46

## Índice de gráficos

GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALIMENTARIOS EN COLOMBIA, 1990-2012	15
GRÁFICO 2: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES COMO PORCENTAJE DEL PIB	16
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL PERSONAL MILITAR COMO PORCENTAJE DE LA FUERZA LABORAL	19
GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN PROCENTUAL DE LOS COSTES POR ATENTADOS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA	20
GRÁFICO 5: NÚMERO TOTAL DE SECUESTROS A NIVEL NACIONAL, ACUMULADO DE ENERO A JUNIO, 1996-2005	21
GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA POR NÚMERO DE VÍCTIMAS, 1980-2012	23
GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB	35
GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN	36
GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	37
GRÁFICO 10: TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA	37

## Índice de mapas

MAPA 1: CONVERGENCIA ENTRE ECONOMÍAS ILÍCITAS Y GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS, JULIO DE 2018	30
---	----

## Índice de anexos

ANEXO 1: COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	46
ANEXO 2: GASTO PÚBLICO MILITAR DE COLOMBIA, 1990 – 2014. CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES DE 2011	47
ANEXO 3: COSTES GENERADOS POR LOS ATENTADOS CONTRA EL OLEODUCTO CAÑO LIMÓN-COVEÑAS	47
ANEXO 4: COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS PROVOCADOS POR EL SECUESTRO, 1996-2003	48
ANEXO 5: INVERSIÓN ESTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA 2012-2017	48
ANEXO 6: COSTES INDIRECTOS (BARRAS OSCURAS) Y DIRECTOS (BARRAS CLARAS) A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS	49
ANEXO 7: PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, SEGÚN SECTOR Y NIVEL DE OPERACIONES	50
ANEXO 8: PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	51
ANEXO 9: SELECCIÓN DE LA PRIMERA MUESTRA DE PAÍSES	51
<a href="#">ANEXO 10: SELECCIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA MUESTRA DE PAÍSES</a>	52
<a href="#">ANEXO 11: PAÍSES CON CONDICIONES SIMILARES AL CASO COLOMBIANO</a>	52

## Introducción

Desde 1964 Colombia ha sufrido un conflicto interno que ha ocasionado oleadas de violencia e inestabilidad, que no solo han afectado a la vida de las personas sino también a la economía del país, y ha supuesto un gran obstáculo para su desarrollo. Con una economía enormemente dependiente de la exportación de recursos naturales y materias primas, y por tanto de inestable ante la fluctuación de los precios de estos recursos, al país se le añade la dificultad de hacer frente unos grandes costes provocados por el conflicto.

Tras varios intentos fallidos a lo largo de las últimas décadas para negociar la paz con las FARC, finalmente en 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos consiguió llegar a un acuerdo que pusiera fin a más de 52 años de una guerra que se ha cobrado miles de muertos y desaparecidos, y millones de desplazados (Lafuente, et. al., 2016). A pesar de que en el referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016 los colombianos decidieron no apoyar el acuerdo con un 50,21% de los votos, este fue aprobado tras negociar la implementación de una serie de modificaciones demandadas por los partidarios del “no”. Cabe destacar que una de las razones que motivó el rechazo inicial del acuerdo fue la creencia por gran parte de la población de que las FARC iban a ser beneficiadas en mayor medida que el resto del pueblo colombiano con unos planes de reinserción muy beneficiosos (Felbab-Brown, 2016).

Las FARC han tenido un importante papel económico en el país durante las últimas décadas, especialmente aquellas zonas rurales controladas, en las que actuaba como suplente del Estado, proveyendo servicios como alcantarillado, colegios o sanidad. Sobre esto descansa gran parte de su apoyo y legitimidad por parte de la población de estas áreas. Por otro lado, la mayor parte de su financiación provenía del narcotráfico, lo que también les otorga el apoyo de los productores de coca y de gran parte de la población rural, olvidada por el gobierno.

El dividendo de la paz ha sido el principal argumento empleado por el gobierno para atraer al sector privado a la aceptación del acuerdo. Para esto, se han elaborado numerosos estudios respecto a los costes que supone el conflicto para la economía y los beneficios que traería la firma del acuerdo como la reducción de la inestabilidad, la pobreza y la desigualdad. Colombia se sitúa ahora en una etapa de posconflicto en la que se deben tomar importantes medidas para garantizar la sostenibilidad de la paz al mismo tiempo que se trata de disminuir la desigualdad y se fomenta el desarrollo rural. Por tanto,

esta investigación pretende analizar este dividendo de la paz, y estudiar efecto que ha tenido el acuerdo en la economía y la desigualdad en Colombia en estos dos años de posconflicto.

Para esto, después de describir los aspectos fundamentales de la economía del país, se analizarán cuales son los principales costes que supone el conflicto, tanto directos como indirectos, es decir, aquellos causados por la pérdida de productividad motivada por la violencia, y a su vez la evolución de dichos costes. Posteriormente, se evaluará el importante papel económico de las FARC y otros grupos armados en las zonas controladas, además de las medidas económicas que se prevén en el acuerdo. Por otro lado, también se analizará la evolución económica de casos similares al colombiano, y las medidas llevadas a cabo en estos países, y por último se estudiarán las perspectivas de futuro que hay en este caso y las dificultades de implementación del acuerdo, así como posibles recomendaciones.

Siguiendo esta estructura, las principales conclusiones a las que se espera llegar en esta investigación son: En primer lugar, que la firma del acuerdo de paz supone un punto de inflexión en la apertura de la economía colombiana, ya que la estabilidad política propiciará un aumento tanto del comercio y la inversión extranjera como del turismo, lo que supone un importante crecimiento de ingresos para el país. Al mismo tiempo, la reducción de los costes derivados del conflicto permitirá un aumento de la productividad y una mayor asignación de recursos a otros ámbitos, como es el gasto social, que permitirá una disminución de la desigualdad y una mejora del bienestar de la población. Además, la desaparición del principal grupo guerrillero permitirá al Estado establecer un mayor control territorial, que se centrará principalmente en disminuir el tráfico ilegal ejercido por los grupos ilegales, un mayor desarrollo de las áreas rurales y una recaudación de impuestos más efectiva.

## Justificación de la investigación

El interés de esta investigación reside en que Colombia, la tercera economía de Latinoamérica y uno de los primeros países en alcanzar la democracia (The Heritage Foundation, 2019) ha salido recientemente de un prolongado conflicto interno que ha afectado profundamente a su economía. Son numerosos los estudios dedicados a estimar el impacto que ha sufrido la economía colombiana a raíz de la violencia, concluyendo en que el enfrentamiento armado tiene una relación inversa con el crecimiento económico

(Ramos, et. al., 2017). Por lo tanto, el fin del conflicto presenta una serie de oportunidades, a la vez que una serie de retos.

Hay diversas estimaciones que sugieren que el crecimiento de la economía en ausencia de conflicto sería de alrededor de un 1.5% mayor (World Bank, 2014), lo que sugiere un enorme potencial económico para el país. Sin embargo, el proceso de paz también acarrea una serie de costes y desafíos para reducir la desigualdad y minimizar las consecuencias contraídas por el conflicto. Algunas iniciativas, como la reinserción de los excombatientes, la devolución de tierras a los desplazados y el pago de reparaciones a las familias y comunidades son de gran importancia para la sostenibilidad de la paz, razón por la que muchas de ellas están incluidas en el acuerdo alcanzado con las FARC, sin embargo, al mismo tiempo exigen un gran desembolso del gobierno y una fuerte voluntad política para llevarlas a cabo. Por esta razón, este trabajo pretende estudiar el impacto, tanto positivo como negativo, que ha tenido la firma del acuerdo de paz en la economía colombiana y analizar cuáles de las medidas acordadas tendrán un mayor impacto en la economía.

A pesar de las importantes limitaciones que ha supuesto el conflicto para el desarrollo de país, la economía colombiana ha presentado importantes tasas de crecimiento durante la última década, de un 4,8% anual, dato propiciado por una buena gestión macroeconómica y por una población joven y trabajadora (Vietor, 2016). Estos resultados han provocado que las principales instituciones financieras globales hayan dejado de considerar a Colombia como un país con alto riesgo para invertir. La creciente estabilidad, motivada por la reducción de la criminalidad y el aumento de la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos, están haciendo al país cada vez más atractivo para la inversión extranjera y abriendo la economía al exterior (World Bank, 2014). Si a este esperanzador panorama le añadimos el cese del conflicto y un incremento de la estabilidad política, Colombia podría posicionarse como uno de los países más seguros y estables de la región, tanto política como económicamente, contrastando con las crecientes dificultades a las que se enfrentan los países vecinos.

Por lo tanto, al gobierno actual se le ha presentado la oportunidad de, aprovechando la estabilidad, desarrollar la economía y hacer de Colombia un país que se abra a los mercados internacionales y cuyo crecimiento atraiga a la inversión exterior. Sin embargo, al mismo tiempo, se deben llevar a cabo medidas que no excluyan a los más pobres. Los índices de desigualdad siguen siendo muy elevados a pesar de las mejoras que se han conseguido durante los últimos años, a pesar de haberse reducido la pobreza, la tasa de

población vulnerable aún es muy alta (World Bank, 2014). A esto se le suma el hecho de que, al ser una economía basada en la exportación de materias primas, la clase media aún se ve enormemente afectada ante los shocks macroeconómicos y a las caídas de precios de productos básicos. También destaca la desigualdad entre las zonas rurales y las zonas urbanas, acrecentada especialmente por el conflicto y la importante presencia de los grupos guerrilleros en estas zonas rurales inaccesibles para el Estado.

Debido al destacado papel económico adquirido por las FARC en las zonas controladas y a las actividades ilegales que se llevaban a cabo para su sustento, especialmente el cultivo de coca, estas regiones han permanecido al margen del resto de la economía colombiana, ya que la falta de asistencia por parte del gobierno ha impedido su desarrollo. Por esta razón, otra de las medidas económicas del acuerdo es la asistencia económica a la población campesina para llevar a cabo una transformación de las economías locales e integrarlas en el sistema productivo del resto del país. En relación con esto, este trabajo pretende estudiar el papel del grupo guerrillero a lo largo de los años del conflicto y evaluar las medidas que se están llevando a cabo para conseguir la reincorporación económica de estas zonas rurales a la economía legal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las buenas perspectivas actuales y también los retos que plantea la paz para el país, la elección del tema del presente trabajo se sustenta por la creciente importancia de Colombia como economía regional, que podría servir además como modelo para otros países en vías de desarrollo con conflictos internos similares, ya que se ha alcanzado un acuerdo histórico. El país se encuentra en un momento de gran importancia, y las acciones que se lleven a cabo en la actualidad pueden determinar el desarrollo, tanto político como económico del país en los próximos años, lo que hace que el tema de estudio sea de gran interés en la actualidad.

## Estado del arte

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un incremento en el número de conflictos internos, que hoy en día son más comunes que los conflictos internacionales, por eso, el estudio de este tipo de conflictos se ha incrementado, y el caso de Colombia no ha sido ajeno a este fenómeno. Durante las décadas de conflicto, el estudio de este ha estado centrado especialmente en las causas que han llevado aumento de violencia, tanto económicas como políticas o sociales, pero dejando al margen el estudio de las consecuencias que haya podido ocasionar el conflicto en estos ámbitos. Por tanto, tradicionalmente, a la hora de estudiar este tema, se consideraba la violencia únicamente



como consecuencia de la desigualdad y los problemas económicos del país, sin embargo, más recientemente, se ha invertido esta relación de causalidad estudiando el efecto que tiene el conflicto armado en el sistema económico, sobre todo a causa de las negociaciones de paz.

Dentro de los estudios centrados en las causas de conflictos, destacan los estudios de Collier y Hoeffler (1998), donde, tras estudiar una muestra de 98 países, concluyen que los conflictos internos ocurren especialmente en países con un bajo ingreso per cápita, factor que adicionalmente causa una prolongación del conflicto. Además, la posesión de recursos naturales también es un factor que impulsa el conflicto. A esto, Ross (2004) añade, en un estudio de trece casos acerca de la influencia que los recursos naturales tienen en los conflictos, que la existencia de petróleo es lo que tiene una mayor relación con el surgimiento de guerrillas debido a desacuerdos en la gestión de recursos, mientras que la existencia de diamantes y la producción de narcóticos produce un efecto de prolongación del conflicto, por otro lado, los bienes agrícolas no son los causantes de guerras. En este mismo argumento se centra Sarmiento (2018) que considera el petróleo como la principal causa del conflicto en Colombia y plantea tres escenarios diferentes para el posconflicto en función de quién controle los principales yacimientos petrolíferos. Estos estudios son especialmente relevantes en el caso de Colombia, ya que, además de tener una economía enormemente dependiente del petróleo, el cultivo y producción de coca es uno de los factores que ha permitido a las FARC obtener recursos para continuar el conflicto.

Con relación a las consecuencias económicas que deja el conflicto, hay numerosos canales mediante los cuales el conflicto puede afectar a la actividad económica, normalmente los estudios se han centrado en algunos de estos canales, especialmente capital físico y niveles de población. Por otro lado, hay que destacar que, en los conflictos actuales, las víctimas suelen ser productores económicos antes que objetivos militares, ya que con esto se consigue debilitar al otro bando más rápidamente, además, los grupos beligerantes deben actuar como agentes económicos en áreas en las que luchan para poder sobrevivir, para esto dirigen industrias, regulan la producción y ofrecen servicios, (Humphreys, 2003) esta situación se puede observar en el caso de las FARC en Colombia.

Los resultados de aquellos estudios dedicados a medir los costes agregados del conflicto mediante todos los canales son muy limitados, ya que una de las dificultades para los investigadores es estimar el coste de la guerra más allá de los costes directos, debido a que esto requiere una estimación de cómo habría funcionado la economía en

ausencia de conflicto. Aquellos modelos econométricos que se han desarrollado con este objetivo producen estimaciones de crecimiento basadas en las características de una economía, su historia, y el funcionamiento de otras economías similares en condiciones pacíficas. Los académicos estiman que, de media, las economías en conflicto crecen a una tasa anual de entre un 1% y un 2% menos que las economías en situaciones de paz. (Humphreys, 2003). Entre estos, destaca el trabajo de Collier (1999), que, tras estudiar un modelo de los efectos económicos de las guerras civiles y probarlo en todos los conflictos internos desde 1960, concluye que durante los conflictos el PIB per cápita se reduce a una tasa anual del 2.2% respecto a los niveles que habría en ausencia de conflicto. Sin embargo, argumenta que el fin de la guerra no siempre supone un dividendo debido al gran gasto militar en el que se incurre y al riesgo del estallido de otro conflicto. Por otro lado, también concluye que la recuperación es más rápida tras conflictos prolongados que en aquellos de menor duración, esto se debe a que los bajos niveles de reservas de fondos hacen que aumente la repatriación de capital al alcanzar la paz, permitiendo un mayor crecimiento económico.

Respecto al conflicto colombiano, a pesar de tener su comienzo en la década de los 60, el estudio de su impacto en la economía no ha sido objeto de estudio hasta varias décadas después. Uno de los primeros en estudiarlo fue Rubio (1997), que analiza los principales canales por los que la violencia afecta a la economía del país y hace hincapié en los factores difíciles de cuantificar como la distribución de recursos o la eficiencia. También propone algunas cuestiones y datos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer políticas de prevención. Desde entonces, los esfuerzos intentar cuantificar los costes del conflicto han emergido, en esta línea cabe destacar los trabajos de Pinto, Vergara y Lahuerta (2005), y de Álvarez y Rettberg (2007). En el primero, los autores estiman que entre 1999 y 2003 los costes del conflicto ascendieron a 16,5 billones de pesos de 2003, o lo que es lo mismo, un 7,4% del PIB de 2003, además, estiman que un 88% de estos costes están ocasionados de forma directa por la actividad criminal. Por otro lado, en el segundo trabajo se hace exhaustiva revisión de la literatura con relación a los distintos tipos de costes, directos e indirectos, analizando cómo han sido calculados y determinando algunas limitaciones en estos estudios, por ejemplo, la dificultad de estimar los costes indirectos, los problemas para distinguir entre costes causados por el conflicto y los causados por la criminalidad generalizada o la variabilidad entre regiones del país y entre sectores económicos.

En definitiva, desde la década de los 90, la literatura referida a la relación entre economía y conflicto es extensa, aunque normalmente centrada a las consecuencias negativas de este, en gran parte con el objetivo de sensibilizar a la población y ciertos sectores económicos y de divulgar las importantes consecuencias del conflicto. Sin embargo, recientemente, y gracias a las perspectivas de paz, los estudios han comenzado a centrarse en el camino hacia esta. En este ámbito, la literatura se ha enfocado tradicionalmente en la propuesta de políticas necesarias para acabar con el conflicto. Humphreys (2003) en su repaso a las investigaciones sobre la relación entre la economía y el conflicto, concluye que las políticas necesarias deben estar destinadas a la reducción de la desigualdad, aumentar el acceso a la educación, llevar a cabo programas de integración y proveer garantías institucionales de una mayor representación política. Además, destaca que el objetivo de las políticas económicas en situaciones de posconflicto debe ser la reconstrucción social antes que los desequilibrios macroeconómicos.

En Colombia, Angelika Rettberg es una de las principales autoras que, además de estudiar el efecto del conflicto, ha contribuido a la investigación del dividendo de la paz. En su estudio de 2008 acerca de los costes del enfrentamiento para el sector privado en Colombia, concluye que el sector empresarial es un socio clave a la hora de la construcción de la paz, ya que esto supondría un aumento de la inversión en productividad, innovación y en el empleo. Sin embargo, la dificultad para calcular el efecto de ciertos costes indirectos, y el hecho de que las empresas se ven afectadas de maneras muy diferentes en función de sectores y localización hacen que sea complicado atraer al sector privado como aliado en la búsqueda de la paz. Por otro lado, Ibáñez y Jaramillo (2006) estudian el impacto del conflicto mediante un modelo macroeconómico, simulando varios escenarios de posconflicto e identificando cuales son los costes que tienen una mayor influencia en la economía y las mejores políticas para mitigarlos. El artículo concluye coincidiendo con el argumento previamente mencionado de Humphreys, acerca de que las políticas sociales proactivas son necesarias para obtener ganancias en el medio y largo plazo.

Por otro lado, Felbab-Brown (2016) da la vuelta a este planteamiento y saca a relucir los costes que supondría la paz para los distintos actores involucrados en el conflicto, teniendo en cuenta además de los costes económicos, también los costes políticos para gobierno, las FARC, el ejército, la élite política, etc. Finalmente concluye sugiriendo distintas medidas que deben ser adoptadas para garantizar una paz duradera y sostenible,

como una reforma tributaria enfocada a reducir la desigualdad, llevar a cabo estrategias orientadas al largo plazo, o concentrar los recursos disponibles en las regiones más vulnerables e ir administrando gradualmente los esfuerzos para la reconstrucción del Estado.

Por último, cabe destacar también el estudio de Gaviria et. al. (2017), que trata de estimar el dividendo que recibirá Colombia tras el cese del conflicto basándose en otros 36 casos similares de países que han terminado sus conflictos internos. Tras estudiar distintas variables macroeconómicas a lo largo de distintos períodos de tiempo concluyen que el cese del conflicto implicaría un crecimiento de la economía colombiana de un 3,5% a un 5%, además se duplicaría el PIB per cápita. La inversión extranjera directa pasaría de los 12.000 millones de dólares anuales a los 35.000 y las exportaciones también se incrementarían en gran medida, llegando a los 65.000 millones de dólares frente a los 35.000 actuales.

Como se puede observar, el estudio de la relación entre conflicto y economía es extenso, y el caso colombiano ha sido estudiado frecuentemente desde diversos puntos de vista y obteniendo distintas conclusiones. Este trabajo pretende reunir estas distintas perspectivas para poder sacar conclusiones acerca del efecto de la paz en la economía.

## Objetivos de la investigación

El presente trabajo pretende estudiar el impacto que ha tenido el acuerdo de paz firmado con las FARC en la economía de Colombia. Para poder responder a este objetivo general se responderán a unas cuestiones específicas:

En primer lugar, se determinarán los principales costes en los que ha incurrido la economía colombiana debido al conflicto. Se estudiarán tanto los costes directos, como los indirectos. Los primeros son los causados de forma directa por el conflicto y la actividad violenta, entre los que se incluyen los daños a la estructura física, los gastos causados por secuestros y el pago de rescates o los gastos en materia de defensa y seguridad debido al conflicto. Respecto a los costes indirectos, se refieren a la pérdida de productividad que surge como consecuencia de la violencia, entre estos se encuentra la disminución de la inversión y fuga de capitales o la inadecuada asignación de recursos entre otros.

Además del coste monetario, también se pretende analizar la influencia del conflicto sobre el desarrollo de la economía colombiana y cuales son las variables macroeconómicas más afectadas. En gran parte de la literatura calcula el coste del

conflicto en términos de PIB y crecimiento, pero también se analizará la prima de riesgo, el desempleo, el PIB per cápita, la inflación, la inversión extranjera directa, las exportaciones, etc. Por otro lado, como ya se ha mencionado, para comprender la economía colombiana durante el conflicto es importante estudiar qué papel han tenido las FARC en la economía durante estos años y cómo ha evolucionado este papel, ya que, a pesar de actuar únicamente en zonas específicas, el impacto que ha tenido el grupo es a nivel nacional.

Al tratarse de un conflicto tan prolongado, la economía ha experimentado períodos con mayor crecimiento que otros, por lo tanto, otro objetivo del trabajo es observar la evolución que ha experimentado la economía a lo largo de todo el conflicto, tanto en términos de costes como de crecimiento macroeconómico. Otro elemento que debe analizarse para comprender el desarrollo de la economía en el posconflicto es el paquete de medidas económicas presentadas en el acuerdo, especialmente la transformación y el desarrollo de las áreas rurales para reducir la desigualdad, al mismo tiempo se analizará como se han implementado estas medidas en los dos últimos años.

Adicionalmente, el estudio de casos similares puede aportar un mayor entendimiento del desarrollo del posconflicto colombiano, por lo tanto, se analizará el dividendo de la paz percibido en otros países con circunstancias similares al caso colombiano, entre los que destacan Irlanda del Norte, Malí, Sri Lanka o Guatemala. Por último, se pretende determinar la evolución de la economía colombiana desde la firma del acuerdo: qué dividendo se puede observar tras dos años de paz, qué acciones se están llevando a cabo y los resultados que están teniendo, así como analizar las perspectivas de futuro para el país y hacer posibles recomendaciones de medidas destinadas a la reducción de la pobreza, la desigualdad, y el fomento de desarrollo.

## Metodología

La metodología de este trabajo está fundamentada en un análisis exhaustivo de la literatura existente acerca de el impacto económico del conflicto colombiano y con especial énfasis en el posible dividendo de paz. Por tanto, se trata de una investigación inductiva basada en el caso colombiano, así como el estudio de procesos similares para posteriormente extraer conclusiones y elaborar posibles recomendaciones. Al mismo tiempo, es de particular importancia el estudio del papel económico que han tenido los grupos ilegales en determinadas zonas, ya que han influido en gran medida en el desarrollo económico de Colombia.

Esta revisión bibliográfica ha propiciado un estudio del conflicto colombiano desde distintas perspectivas para obtener una visión global del impacto económico de este. Se analizan por tanto los costes a los que se enfrentan los distintos agentes económicos como consecuencia del conflicto, la influencia que han tenido los grupos ilegales en la economía, las medidas específicas plantea en el acuerdo para resolver la situación económica, el impacto de la paz en la economía de países que se han enfrentado a las mismas circunstancias, y finalmente qué se espera en el futuro para Colombia y qué políticas sería recomendable llevar a cabo.

La información recogida es en su mayoría de carácter cualitativo, sin embargo, se han extraído los datos cuantitativos más relevantes para el tratamiento de este asunto. Las fuentes son principalmente publicaciones académicas, aunque al tratarse de un tema de actualidad, también se han empleado artículos periodísticos, tanto de fuentes locales como internacionales. Además, ha sido frecuente el uso de fuentes primarias e informes elaborados por instituciones económicas colombianas, como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) o el Alto Comisionado para la Paz, y por instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o la OCDE.

Una de las principales dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo la investigación ha sido la falta de estudios recientes relacionados con el impacto económico del conflicto, lo que ha obligado a utilizar datos y estadísticas de entre los años 2001 y 2005 en dicha sección. Además, tras únicamente dos años desde la firma del acuerdo no se han elaborado aún informes que midan con exactitud el dividendo de la paz, ya que algunas de las reformas acordadas no se han implementado aún, o no han avanzado al ritmo esperado.

## Análisis

### 1. Características de la economía colombiana

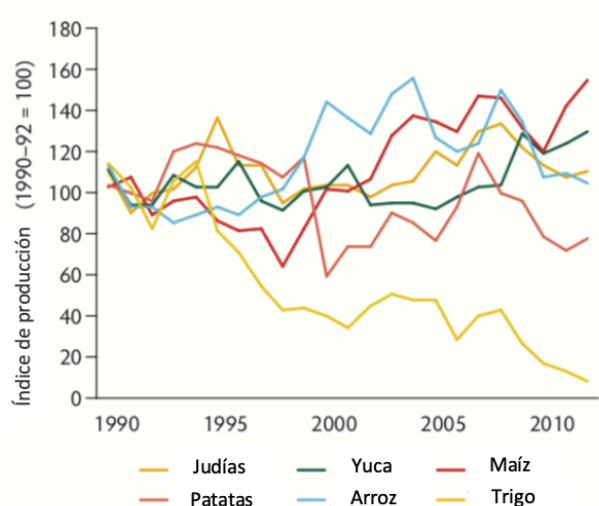
En Colombia coexisten actualmente dos realidades opuestas: por un lado, es una democracia estable, con una de las economías más dinámicas de América Latina, de ingreso medio-alto, e integrada en la economía global cumpliendo con los estándares de la OCDE. Por otro lado, el país se ha visto atrapado en un prolongado conflicto que ha traído consigo prolongados períodos de violencia en los que la desigualdad, la pobreza y la limitada capacidad institucional fortalece el conflicto armado, y viceversa. La existencia de esta doble realidad impide el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas, dejando de lado a ciertas regiones y grupos de población, ya que la

violencia es mayor en regiones con una débil capacidad institucional, ingresos derivados de la explotación de recursos naturales, y la presencia de grupos armados (Banco Mundial, 2014).

Stewart & Fitzgerald (2001) establecen que la vulnerabilidad de un país frente al impacto de un conflicto dependerá de las condiciones económicas del país, su grado de desarrollo y la flexibilidad de su sistema productivo, razón por la cual es importante conocer las principales características económicas de Colombia antes de aproximarnos a entender el efecto del conflicto sobre estas.

Al igual que gran parte de las economías de América Latina, Colombia es un país enormemente dependiente de los recursos naturales, especialmente café, petróleo y carbón, lo que hace que su economía sufra de una especial vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios de estos productos. Esto tiene un profundo impacto en las clases medias y vulnerables, además de aumentar la desigualdad, por esta razón, algunos de los principales retos de la economía colombiana una vez alcanzada la paz es mejorar la inclusión y reducir la desigualdad para poder construir una paz sostenible y fomentar el desarrollo del país.

Gráfico 1: Producción de los principales cultivos alimentarios en Colombia, 1990-2012



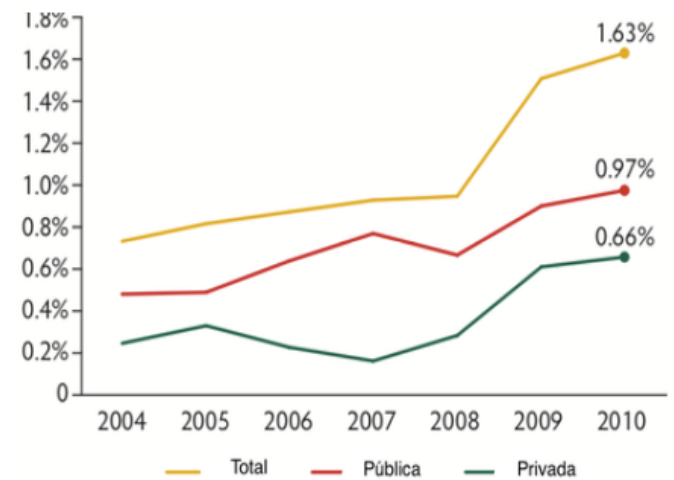
Fuente: Banco Mundial (2014)

Como consecuencia de este enorme peso de las exportaciones de materias primas en la economía del país, la agricultura es una de las actividades más importantes, especialmente la producción de café, caña de azúcar, maíz u hortalizas. Colombia está dotada de grandes extensiones de tierra idóneas para el cultivo y de recursos de agua dulce, por lo que su sector primario tiene un gran potencial. Sin embargo, debido a políticas ineficientes, falta de servicios públicos en las zonas rurales y una infraestructura poco desarrollada, muchos

productores han quedado aislados y sin acceso a los mercados, lo que ha ido abriendo la brecha entre la población urbana y la población rural. Esto se ha visto acrecentado además por el conflicto, ya que muchas de las áreas rurales estaban controladas por las guerrillas y grupos paramilitares debido a la dificultad del Estado de acceder a ellas, con la consecuente usurpación de tierras a agricultores y desplazamiento forzado para emplear esas tierras en cultivos ilegales.

En cuanto a la industria, las más desarrolladas del país son la minería y la industria petroquímica, que de hecho suponen un 7% del PIB (Sarmiento, 2018). Además de carbón, Colombia es un país rico en piedras preciosas como oro, diamantes y esmeraldas, esto hace que sector de la minería sea atractivo para explotar ilegalmente, cosa que han hecho durante las últimas décadas los grupos guerrilleros y al margen de la ley, causado un importante daño medioambiental, además del robo de tierras y contribuir también al problema del desplazamiento forzado. Respecto al petróleo,

Gráfico 2: Inversión en infraestructura de transportes como porcentaje del PIB



Fuente: Banco Mundial

Colombia es el cuarto país productor de América Latina, con 715.000 barriles diarios (Iberoeconomía, 2018). Sin embargo, estos sectores se ven gravemente afectados por la falta de infraestructura, que al estar tan poco desarrollada supone un grave obstáculo para que los productos lleguen a puerto para su exportación. Por esta razón, con el objetivo de aumentar el comercio exterior como motor de crecimiento, tanto el gasto público como la inversión privada en infraestructura está aumentando con el fin de aprovechar la localización estratégica del país con salidas costeras al Atlántico y al Pacífico (Vietor, 2016). Con este mismo objetivo, el país ya cuenta con tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico entre otros.

Por otro lado, la creciente urbanización y desarrollo de la economía durante las últimas décadas ha hecho que el crecimiento de las actividades manufactureras, servicios financieros y el comercio hayan contribuido a más del cincuenta por ciento del crecimiento del PIB en las últimas cuatro décadas. El sector financiero se ha expandido enormemente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los más desarrollados de la región, sin embargo, cabe destacar que una parte importante de la población aún carece de servicios financieros, especialmente en áreas rurales (Banco Mundial, 2014).

Con un tipo de cambio flotante y un banco central independiente que busca controlar la inflación, el gobierno ha conseguido tener un reducido déficit fiscal y mantener la inflación por debajo del 2.5% (Vietor, 2016). Según la previsión de la OCDE de 2018, se espera que la economía colombiana crezca, ya que la paz ha traído consigo un aumento del gasto y los contratos en infraestructura, además ha habido una bajada de los impuestos, y un aumento del precio del petróleo, lo que aumentará la inversión en el país,



apoyada además por un aumento de la confianza y la estabilidad doméstica y una tasa de interés baja. Con este crecimiento, se espera que disminuya el desempleo, y a pesar de que la desigualdad continúa en una tasa elevada, los indicadores sociales están mejorando.

La persistencia de los altos niveles de desigualdad está relacionada con varios factores, entre los que se incluyen el acceso insuficiente a la educación superior, a las pensiones y a una vivienda asequible. Sin embargo, estos factores han presentado ligeras mejoras en los últimos años. La excepción es la persistente desigualdad entre regiones, la brecha entre los departamentos con las más altas y bajas tasas de pobreza ha ido incrementando a lo largo de la última década. La promoción de las políticas sociales y el crecimiento en las regiones vulnerables de Colombia son esenciales para reducir la desigualdad. Además de las diferencias regionales, otro aspecto importante de la pobreza y la desigualdad afecta a los grupos desfavorecidos: las personas internamente desplazadas, la comunidad indígena y los descendientes africanos. Las minorías étnicas presentan las mayores tasas de pobreza. En la última década, Colombia ha reducido la pobreza más rápido que nunca, sin embargo, la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza continúan a unos niveles enormemente elevados (Banco Mundial, 2014).

## 2. Costes económicos del conflicto

Durante los 52 años que ha durado el conflicto colombiano, la economía ha tenido que hacer frente a numerosos costes derivados de este, que han afectado a todos los sectores y al desarrollo del país. Los principales canales mediante los cuales el conflicto afecta al crecimiento económico son la destrucción y el deterioro del capital, la utilización de recursos a la financiación de la guerra y el descenso de las tasas de ahorro e inversión. Además, los agentes económicos se ven obligados, a raíz del conflicto, a invertir en alternativas que conlleven un menor riesgo, y por tanto supongan a su vez un retorno inferior, con la consecuencia de que estas inversiones no solo son menos productivas, sino que en algunos casos fomentan la destrucción. Todos estos factores suponen una distorsión en el desarrollo económico y social del país, afectando a los principales indicadores macroeconómicos, cuyo impacto persiste en el tiempo, incluso durante el período de posconflicto (Ibáñez & Jaramillo, 2006).

La literatura tradicionalmente ha clasificado los costes del conflicto en dos tipos, directos e indirectos, atendiendo a diferentes criterios, por tanto, para llevar a cabo este análisis, primero se definirá qué se entiende en el presente trabajo por cada uno de estos

costes, asimismo en el anexo 1 se presenta una tabla con esta clasificación y diversos ejemplos de cada tipo de coste.

## I. Costes directos

Pinto et al. (2005) definen los costes directos como aquellos que suponen una asignación de recursos o una pérdida directa de capital causada por el conflicto y que, a pesar de que terminan afectando a la economía en general, se puede identificar directamente a qué actor perjudica. Dentro de estos costes se incluirían los gastos del Estado en defensa y seguridad para luchar contra los grupos guerrilleros, los costes que suponen los ataques destinados a desestabilizar la economía, como la destrucción de infraestructura, y el gasto en el que se debe incurrir para su reparación. Otros ejemplos de costes directos serían el pago de rescates por secuestro o la asistencia económica que ofrece el Estado por desplazamiento forzado.

### A) Gastos en defensa y seguridad

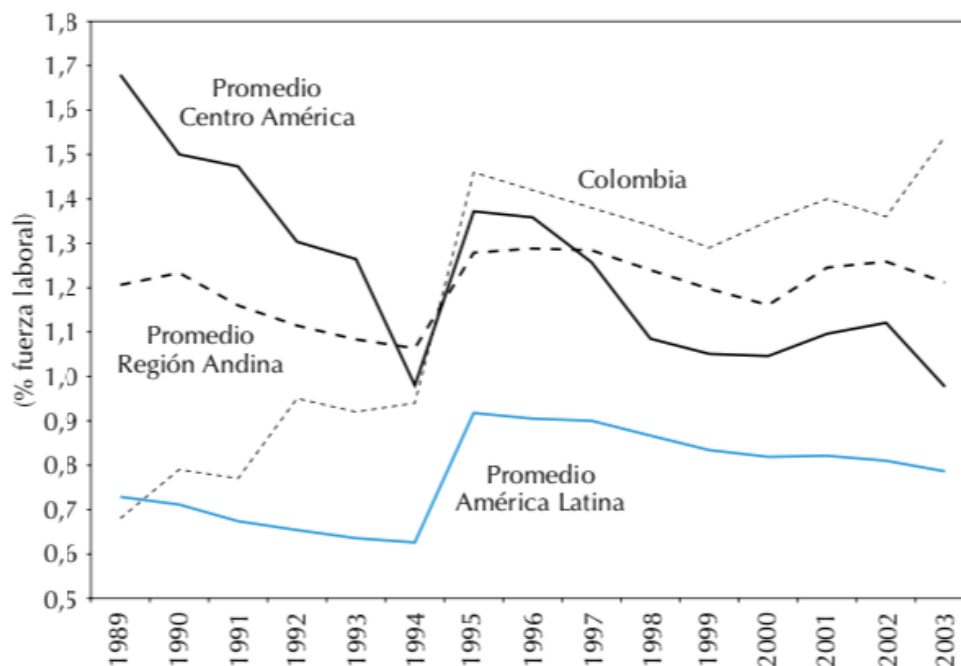
El gasto del Estado Colombiano en defensa y seguridad supera con creces el del resto de la región y ha llegado a ser de los más altos del mundo. En el año 2001 ocupó el puesto 24 de los países que más porcentaje de su PIB invierten en gasto militar con un 3,8%, según un estudio del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, por encima incluso de Estados Unidos con un 3,1%. Además, esta cifra ha ido aumentando progresivamente, ascendiendo un 6,59% en 2004 y, colocandola Colombia entre los diez países con un mayor gasto en seguridad (Álvarez & Rettberg, 2008).

Este gasto adicional destinado a las acciones de los grupos ilegales, es decir, el adicional al que tendría el país en ausencia de conflicto presenta una tendencia creciente desde la década de 1960. El surgimiento de los grupos armados en este período y la intensificación de la violencia durante las décadas siguientes llevó a un incremento del gasto en defensa hasta alcanzar el 2,08% del PIB en 1990 (González & Posada, 2001).

Esta tendencia se mantuvo durante la década de los noventa, y se incrementó debido al fortalecimiento de la Fuerza Pública, constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo tanto, en 2004 el gasto en defensa aumentó hasta el 4,5% del PIB (Ibáñez & Jaramillo, 2006).

Colombia es el país de América Latina que más gasta en seguridad en relación a su PIB, Pinto et al. (2005) estiman que para el período 1999-2003, el gasto adicional colombiano respecto al promedio de gastos del resto de países de la región fue de un 0,79% anual. Para información más detallada, en el Anexo 2 hay una comparación de los

Gráfico 3: Evolución del personal militar como porcentaje de la fuerza laboral



Fuente: Ibañez y Jaramillo, 2006

gastos militares de varios países de la región. Sin embargo, hay varias razones que explican este elevado gasto, y por qué no implica una mayor eficiencia a la hora de hacer frente a los grupos armados. En primer lugar, las fuerzas armadas llevan a cabo funciones muy diversas más allá del conflicto armado, como la asistencia en desastres, misiones de mantenimiento de la paz, o asistencia humanitaria. En segundo lugar, el personal de apoyo de las fuerzas colombianas es sustancialmente mayor a la media de países: la proporción entre soldados y personal de apoyo en Colombia es de uno a ocho mientras que lo recomendado es que sea de uno a tres (González & Posada, 2001). Por último, es necesario tener en cuenta la cantidad de presupuesto destinada al pago de pensiones, ya que el gasto en defensa del año 2002, que representa un 3,7% del PIB, quedaría reducido a un 2,2% si se sustrae el pago de las pensiones (Caballero, 2002). A esto se une la inversión para la mejora de las capacidades de la Fuerza Pública suele ser escasa, alrededor del 10% (Cárdenas, Cadena, & Caballero, 2005).

Por otro lado, es importante que en este caso el creciente gasto en defensa no ha tenido lugar a costa de otros gastos públicos, ya que, en la década de los noventa, también se produjo un aumento importante del gasto social, lo que indica que no se ha dado una redistribución de los recursos a favor del gasto en defensa. Sin embargo, la consecuencia de esto fue un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, que llegó a estar en el 53,9% del PIB en 2002. Este creciente desequilibrio financiero obligó al país a solicitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional mediante un acuerdo de estabilización (Ibáñez & Jaramillo, 2006)

### B) Daños a la infraestructura física

La destrucción de infraestructuras tiene como objetivo disminuir la capacidad productiva del país, razón por la cual las redes de transporte, las de generación eléctrica, o las escuelas se han convertido en un importante blanco de los grupos armados, que priorizan el ataque a objetivos económicos con el fin de debilitar al otro bando (Humphreys, 2003).

Como ya se ha mencionado, Colombia tiene una economía enormemente dependiente de la exportación, por lo que los daños a la infraestructura tienen un importante impacto en sectores productivos de gran importancia como son la distribución o el sector petroquímico. Entre los años 1999 y 2003 hubo un total de 2.082 ataques a la infraestructura del país. Los principales ataques se concentran en las torres eléctricas, y de telecomunicaciones, puentes, carreteras, y oleoductos. A pesar de que la mayoría de estos ataques están destinados hacia la estructura eléctrica, un 65%, el daño a oleoductos es el que más gasto ocasiona, especialmente a partir de 1990, cuando los ataques hacia estos aumentaron exponencialmente. Se estima que entre 1999 y 2003 el coste asumido por el sector petrolero se incrementó un 59%, llegando a los \$817.654,5 millones. Los costes derivados de los atentados a oleoductos incluyen la reparación del oleoducto, el petróleo que se pierde, y la descontaminación y limpieza necesaria en la zona donde se derrama el petróleo (Álvarez & Rettberg, 2008). En el anexo 3 se puede ver gráficamente el aumento de los

Gráfico 4: Distribución porcentual de los costes por atentados contra la infraestructura



Fuente: Pinto et. al. (2005)

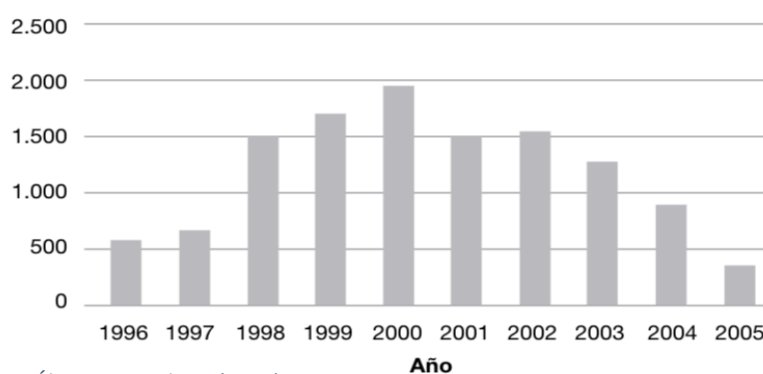
costes generados por los ataques contra la infraestructura petrolera en el período 1999-2003 en comparación con el período anterior.

### C) Costes por secuestro y el pago de rescates

El secuestro ha sido una actividad bastante común en Colombia durante el conflicto, llevado a cabo por los grupos ilegales y destinado a intimidar a la población, expandir el control territorial y aumentar los ingresos del conflicto. Por esta razón, el secuestro genera dos tipos de coste, directos e indirectos: los costes directos derivan del pago de rescates y el esfuerzo de prevención y erradicación por parte del Estado, que se estima que suponen un 64,4% del coste asociado a esta actividad y son los costes que se estudiarán en esta sección. Por otro lado, los costes indirectos se producen debido a la pérdida de capital humano, representan el 35,5% restante (Álvarez & Rettberg, 2008) y se analizarán más adelante. En el anexo 4 se puede observar una estimación de los costes derivados del secuestro, tanto directos como indirectos para el período 1996-2003.

La mayoría de los secuestros son extorsivos o con fines políticos, es decir, que su objetivo es exigir el pago de rescates o generar presión por el papel político del secuestrado. Se estima que entre 1964 y 2007 ha habido un total de 51.530 secuestros, siendo más de 30.000 de estos, secuestros extorsivos (Otero Prada, 2008). A partir de 1996, comenzó una tendencia ascendente en el número de secuestros, llegando a su máximo en el año 2000 con 1.938 casos, y comenzando su descenso a partir de entonces, como se puede observar en el gráfico 4. Esta oleada de secuestros supuso que el gasto del Estado en la prevención y lucha contra este fenómeno aumentara entre 1996 y 2003 un 14% (Ramos et al., 2017).

Gráfico 5: Número total de secuestros a nivel nacional, acumulado de enero a junio, 1996-2005



Fuente: Álvarez y Rettberg (2008)

#### D) Costes por desplazamiento forzado

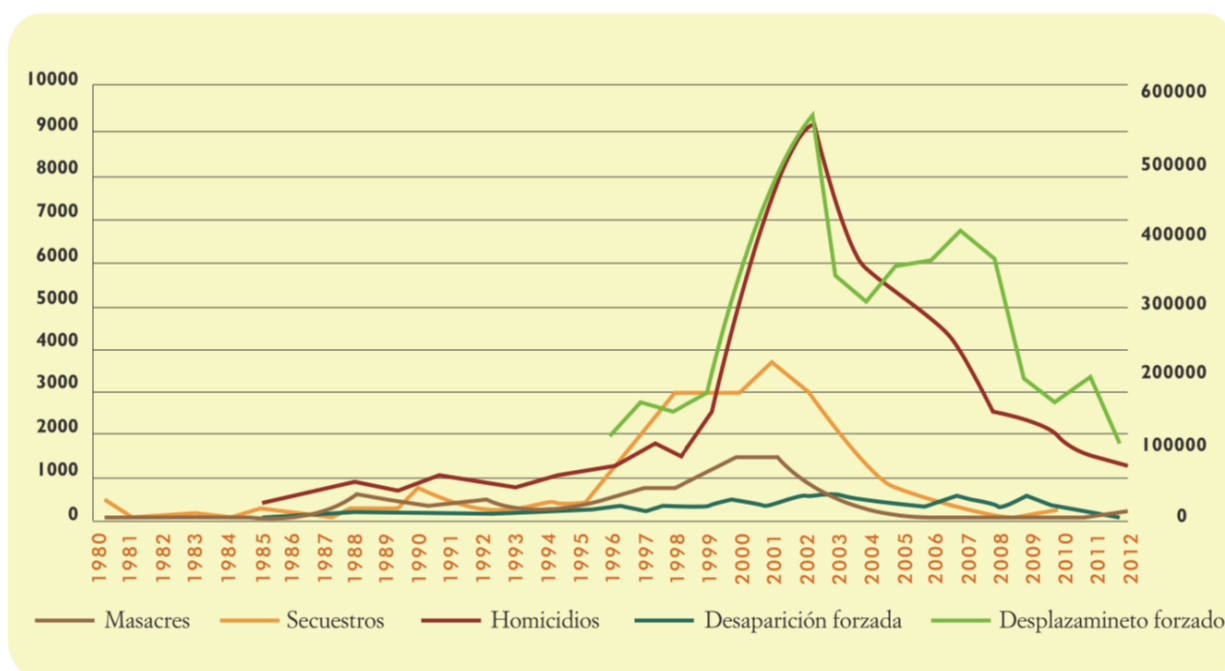
El desplazamiento forzado surge por el control territorial de las áreas rurales por parte de los grupos armados y el robo de tierras a campesinos, que provoca un éxodo de la población hacia áreas urbanas huyendo de la violencia y el tráfico de drogas. Este fenómeno, al igual que el secuestro, produce tanto costes directos como indirectos, los directos consisten en las ayudas y medidas del Estado para mitigar este problema, que entre 1999 y 2003 ascendió a 463.950\$. Sin embargo, en este caso los costes indirectos son más difíciles de calcular ya que van unidos a la alteración del sector agrario, el abandono de tierras productivas, pérdida de empleo, etc. (Pinto et al., 2005) y que supone uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las regiones rurales del país y un aumento la desigualdad.

Solo en 2015, 200.000 personas fueron desplazadas forzosamente (Felbab-Brown, 2016). Este desplazamiento supone una importante caída en los niveles de bienestar, por lo que gran parte de la población colombiana debe hacer frente a situaciones socioeconómicas de gran precariedad (Ibáñez & Jaramillo, 2006)

Además, estas personas están entre los grupos más vulnerables de la población, en 2010 su tasa de pobreza era del 96.7%, y de pobreza extrema un 66.4%, es decir, al menos una de cada cuatro personas en situación de extrema pobreza era desplazada interna en 2010 (Banco Mundial, 2014).

El acuerdo de paz promete devolver la tierra robada a las personas desplazadas, cuyo número se estima que asciende a los 7 millones de personas, o proveerles con tierras en otras zonas, sin embargo, a pesar de que se lleva varios años trabajando en la creación de catastros y en la entrega de títulos, se ha avanzado muy despacio. Por otro lado, muchos de estos desplazados no quieren volver a las zonas rurales, por lo que se contempla la opción de ofrecer paquetes de ayuda económica y formación, pero esto también conllevaría un gran gasto a corto plazo (Felbab-Brown, 2016).

Gráfico 6: Evolución de las principales modalidades de violencia del conflicto armado en Colombia por número de víctimas, 1980-2012



Fuente: Grupo de Memoria Histórica (2013)

## II. Costes indirectos

Este tipo de costes no representa una asignación directa de recursos, sin embargo, supone una pérdida de productividad o un coste de oportunidad ocasionado por el conflicto. A diferencia de los costes directos, que son fácilmente medibles y se puede identificar quién realiza el desembolso, este tipo de costes en muchos casos no se pueden calcular, o se basan en estimaciones de costes de oportunidad. Por otro lado, es complicado determinar si afectan a un actor en específico, ya que en su mayoría perjudican al conjunto de la economía.

### A) Disminución de la inversión y fuga de capitales

La inestabilidad política supone un importante desaliento para la inversión privada, especialmente cuando esta inestabilidad va acompañada de violencia. Por esa razón, el conflicto ha supuesto importantes pérdidas para la economía colombiana, impidiendo retener a empresas extranjeras y desincentivando la inversión interna.

Los conflictos internos causan dos tipos de alteración de las inversiones. Por un lado, los actores económicos buscan disminuir el riesgo de sus inversiones frente a la

inestabilidad, por tanto, invierten en actividades con bajo riesgo, que suelen ir acompañadas de una menor productividad, además, en lugar de invertir en activos reales, se opta por los activos financieros, que presentan una menor vulnerabilidad ante la destrucción asociada con el conflicto (Collier & Gunning, 1995). A esto se le suma que la aversión al riesgo lleva a los agentes económicos a invertir en activos en el extranjero. Según el estudio de Hoeffler & Reynal-Querol (2003) antes de un conflicto, la media de activos extranjeros de los países de un 8,6%, mientras que durante el conflicto esta asciende a un 19,7%.

Más allá del riesgo y la incertidumbre asociadas al conflicto, otros factores como el crecimiento de los costes de producción, debido al aumento del coste en transporte, comunicación y transacción, o la limitación del crédito también desincentiva la inversión, tanto nacional como extranjera (Stewart & Fitzgerald, 2001).

En el caso colombiano, se estima que la pérdida de la inversión privada por el conflicto ha llegado a suponer 0,53 puntos del PIB. Incluso algunos estudios demuestran que un aumento de un 1% en la tasa de homicidios, tiene un impacto de reducción de la inversión privada en un 0,66% ya que se aumenta el nivel de incertidumbre de los inversores, y además reduce la rentabilidad de las inversiones por la necesidad de aumentar el gasto en seguridad (Álvarez & Rettberg, 2008).

Sin embargo, desde 2010, el flujo de Inversión Extranjera Directa ha ido aumentando en el país, alentado por las perspectivas de paz y las medidas económicas, por lo que se está empezando a generar un clima de mayor confianza para invertir. En el anexo 5 se puede observar la tendencia creciente en estos flujos que está experimentando el país.

## B) Alteración de la administración eficiente de empresas

Como ya se ha observado, el conflicto tiene importantes implicaciones para la administración de las empresas, ya que estas pueden verse afectadas de forma directa al ser un blanco para la extorsión y mediante el ataque de sus infraestructuras. Sin embargo, su actividad también se ve afectada de forma indirecta. En primer lugar, la presencia de los grupos guerrilleros en ciertas zonas supone que estos controlen la producción y el comercio de la región, incluso, en numerosas ocasiones, creando monopolios e impidiendo que las empresas tengan acceso a ciertos recursos. Por otro lado, la pérdida de capital humano supone un importante perjuicio para las empresas, especialmente debido al absentismo laboral. Por estas razones, las empresas deben destinar una parte



importante de sus recursos a su seguridad, impidiendo que lleven a cabo inversiones productivas (Humphreys, 2003).

Por tanto, las empresas colombianas se ven más frecuentemente afectadas por los costes indirectos que por los directos, ya que son pocas las empresas que han sido directamente atacadas por el conflicto. Sin embargo, las empresas grandes son las que asumen más costes derivados de este, ya que son más atractivas para la extorsión, y las que más pierden ante la inestabilidad (Álvarez & Rettberg, 2008). Los anexos 5 y 6 muestran esta situación, detallando los costes del conflicto que más afectan a las empresas (seguros, seguridad, amenazas, etc.) y las pérdidas de oportunidades de negocio en función del sector y nivel al que operan.

### C) Pérdida de capital humano

Las estrategias militares actuales suponen una mayor implicación de la población civil, ya que los grupos ilegales optan por la intimidación, o el asesinato de civiles con el fin de debilitar el apoyo popular del rival. Esta nueva estrategia supone que el número de víctimas civiles aumente exponencialmente. Se calcula que mientras que a principios del siglo XX, el 90% de víctimas de conflictos eran soldados, en 1990 el 90% pasaron a ser víctimas civiles (Cairns, 1997). Estos costes sobre la población, que se traducen en la pérdida de vidas humanas, el deterioro de la salud y la reducción de la inversión en capital humano, suponen un profundo impacto en la economía del país, cuyas consecuencias persisten en el largo plazo.

El impacto más evidente del conflicto sobre la población es en la salud de las personas, la tasa de mortalidad aumenta, y a su vez la demanda de servicios sanitarios. Al mismo tiempo que aumenta esta demanda, el capital físico y humano del sistema de salud se deteriora debido a la destrucción de infraestructuras y a la emigración de personal cualificado, lo que supone que el sistema sanitario sea uno de los más afectados por el conflicto (Ibáñez & Jaramillo, 2006)

Por otro lado, la inversión en capital humano se reduce debido a un menor retorno de la educación y una disminución de la oferta educativa ligada a una menor demanda de capital humano, al mismo tiempo que disminuye la asistencia como consecuencia de conflicto (Ibáñez & Jaramillo, 2006). Por lo tanto, en el largo plazo esta reducción de la oferta educativa tendrá importantes consecuencias económicas ya que habrá una menor tasa de población cualificada, y aquellos trabajadores con una mayor cualificación

dispondrán de más medios para emigrar, lo que implica que el país tenga graves dificultades para retener el talento (Humphreys, 2003).

En definitiva, se estima que las pérdidas anuales en capital humano en Colombia debido a los ataques a la población civil y al empeoramiento de la calidad educativa suponen un 4% del PIB (Ibáñez & Jaramillo, 2006).

#### D) Pérdida de la productividad de tierras

Este coste, aunque especialmente asumido por agricultores y ganaderos, termina siendo problemático para el conjunto de la economía colombiana debido a su gran dependencia en los recursos naturales. La causa principal es el asentamiento de los grupos guerrilleros en zonas estratégicas y el uso de estas tierras para la producción ilegal, lo que a su vez ha provocado una devaluación del valor de las tierras y la imposibilidad de administrarlas de manera eficiente. Entre 1999 y 2003, se estima que los costes derivados de la pérdida de productividad de las tierras ascendieron a los 140.443,5\$ millones, es decir, un 1,28% del PIB del sector agropecuario de 2003 (Pinto et al., 2005). Se estima que aproximadamente 1,2 millones de hectáreas han sido abandonadas o robadas, lo que equivale al doble de la cantidad otorgada por el programa de Reforma Agraria llevado a cabo entre 1993 y 2000 (Ibáñez & Jaramillo, 2006).

#### E) Impacto sobre la pobreza y la distribución de recursos

Una de las principales consecuencias de los conflictos internos es el aumento de la pobreza y la desigualdad. Algunos grupos de la sociedad pueden verse beneficiados por el conflicto a costa de otros grupos que se pueden ver especialmente perjudicados, este efecto además puede provocar un alargamiento del conflicto, ya que los grupos beneficiados no tienen incentivos para poner fin a la violencia, además, los grupos más pobres de la población carecen de recursos para hacer frente a los shocks económicos a los que se enfrentan (Keen, 2001). En el caso colombiano este impacto es especialmente grave debido a la falta de presencia del Estado en las áreas rurales, lo que hace que la población campesina sea especialmente vulnerable.

Según las estimaciones, un 1,3% de los propietarios rurales poseen el 48% de las mejores tierras, esto se debe no solo al control de tierras por parte de los grupos armados, sino también a la obtención de propiedades devaluadas (Rubio, 1997). Como

consecuencia, se calcula que el país habría perdido un 17% del ingreso per cápita en la década de 1997 a 2007 (Álvarez & Rettberg, 2008).

### 3. El papel económico de los grupos ilegales

En 2001, aparece en el escenario internacional una nueva clasificación para ordenar a los estados en función de su capacidad para ejercer control sobre su territorio: estados fuertes, estados débiles y estados fallidos. Rotberg (2007) define los estados fuertes como aquellos que son aquellos capaces de ejercer un control efectivo sobre la totalidad de su territorio y ofrecer servicios y bienes públicos de calidad al conjunto de la ciudadanía. Por el contrario, los estados fallidos son aquellos en los que el gobierno pierde la legitimidad y la autoridad, los grupos criminales toman el control y se incrementa el tráfico de drogas y de armas. En un punto medio está la Colombia del conflicto, un estado débil debido a limitaciones geográficas y económicas, con una elevada tasa de criminalidad, una infraestructura deteriorada que impide que el Estado no pueda acceder a ciertas zonas, y una creciente desigualdad (Ramirez Montañez, 2017).

La debilidad del estado ha permitido a los grupos ilegales controlar gran parte de las áreas y recursos rurales del país, lo que ha afectado en gran medida al desarrollo de la economía colombiana durante las últimas décadas, impidiendo el desarrollo social y económico de las zonas controladas y aumentando la desigualdad entre población urbana y rural. Tradicionalmente, los grupos rebeldes en conflicto internos participan en la economía únicamente como extractores de recursos, ya que una de sus principales fuentes de financiación deriva del control y el tráfico ilegal de recursos naturales y agrícolas: petróleo, madera, drogas, etc. Sin embargo, en ocasiones los grupos rebeldes también se dedican a actividades productivas y a organizar la actividad económica de las zonas controladas, e interactuando con la economía local, lo que afecta al bienestar de la población así como al desarrollo del conflicto, ya que pueden conseguir apoyo entre la población civil (Humphreys, 2003). Las FARC son un ejemplo, ya que históricamente han obtenido legitimidad en sus zonas de operación debido a que han actuado sustituyendo al estado y proveyendo bienes y servicios públicos como alcantarillado, clínicas o escuelas con ingresos provenientes en su mayoría del tráfico de drogas (Felbab-Brown, 2016).

Sin embargo, desde la desmovilización de las FARC tras la firma del acuerdo, ha habido una respuesta insuficiente por parte del Estado de fortalecer las instituciones y

recuperar la autoridad local en dichas áreas, lo que está permitiendo a otros grupos armados asentarse en áreas previamente controladas por las FARC. Estos grupos son en la actualidad el principal obstáculo para establecer la presencia del Estado en todo el territorio y asegurar expansión las garantías democráticas, y a diferencia de las FARC, estos grupos se dedican a actividades meramente extractivas, obligando a la población civil de las áreas ocupadas a desplazarse y haciendo uso de la violencia, la extorsión y el robo de tierras para expandir sus áreas de control (DNP, 2019).

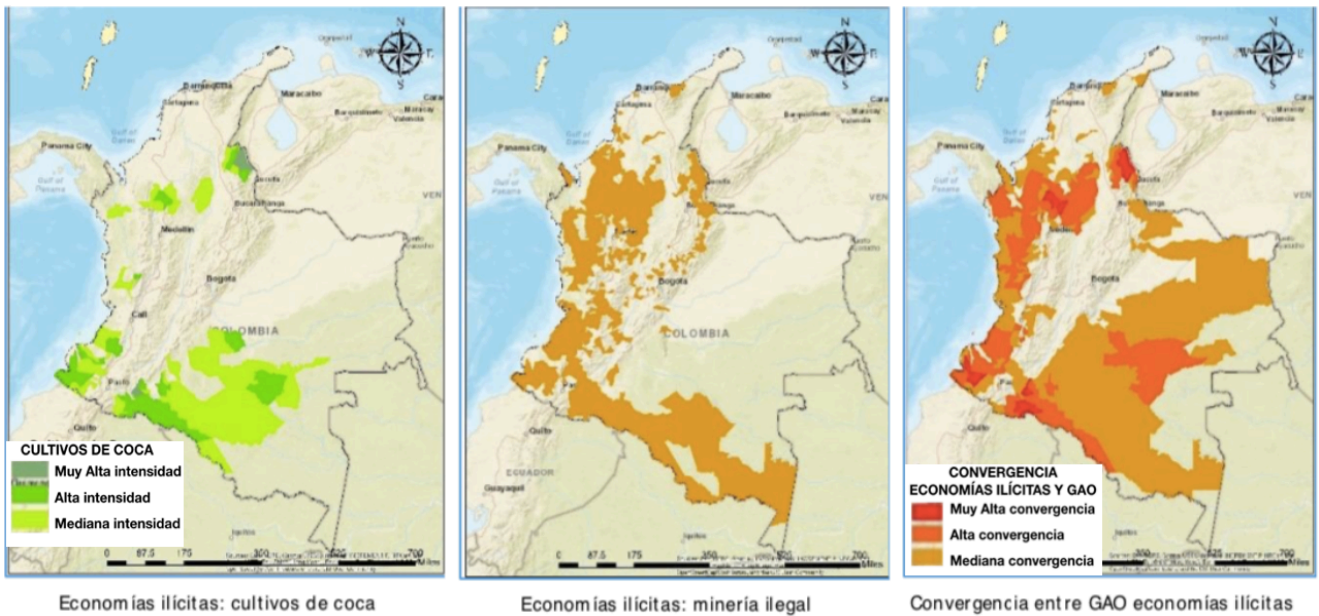
Las principales fuentes de financiación de estos grupos son el narcotráfico, la extracción de minerales y la tala ilegal. El auge del narcotráfico comenzó a finales de la década de los setenta, y desde entonces, esta actividad fue en aumento en Colombia, que entre 1981 y 1985 ya controlaba el 50% del mercado. En los años siguientes los grupos se organizaron en distintos carteles regionales, relegando a organizaciones de otros países como Perú y Bolivia, y pasando a dominar un 75% del mercado, convirtiéndose en 1998 también en el primer país productor de hoja de coca debido a acuerdos entre los cultivadores y los grupos armados (Rocha, 2001). Aunque ha habido numerosos intentos de acabar con el narcotráfico, entre los que cabe señalar el Plan Colombia, que contaba con la asistencia y financiación de Estados Unidos, en la actualidad el tráfico ilícito de drogas sigue teniendo un papel importante en la economía colombiana, y está relacionado con el lavado de dinero. Las estimaciones señalan que en 2008 los ingresos del narcotráfico ascendieron a los 13,6 billones de dólares, es decir, un 2,3% del PIB si bien es cierto que se ha logrado un descenso, ya que se estima que en las décadas de los ochenta y noventa suponía el 3% del PIB, la cifra sigue teniendo un gran impacto en la economía de país y se estima que en 2017 el número de hectáreas de producción de coca era de entre 171.000 y 209.000, gran parte de estas hectáreas han sido deforestadas. Se estima que desde 2012 se han deforestado un millón de hectáreas en todo el país, lo cual tiene graves consecuencias medioambientales a la vez que económicas (DNP, 2019).

Por otro lado, la minería ilegal también es una importante fuente de recursos para los grupos armados, especialmente desde 2007 con el aumento de los precios de recursos naturales. La extracción y comercialización ilícita de minerales y piedras preciosas genera unos ingresos similares a los del narcotráfico, lo que hace que la explotación minera esté aumentando, se estima que el 86% del oro producido en Colombia en 2012 fue extraído de forma ilícita y únicamente 37% de los centros de producción minera tienen la certificación necesaria (DNP, 2019).

Los efectos de estas actividades tienen también un serio impacto a largo plazo, ya que, además del fortalecimiento de estos grupos, están afectando a importantes recursos estratégicos del país, especialmente a los parques naturales, los páramos, la biodiversidad y los recursos hídricos. Esto se debe a que las actividades ilícitas conllevan un aumento de la deforestación, la cacería, la construcción de infraestructura en áreas protegidas y la contaminación, que pone en peligro estos activos. En 2017 se encontraron cultivos ilícitos en 16 de las 59 áreas protegidas del país, y las predicciones indican que, debido a estas prácticas, en 20 años se podría haber destruido la totalidad de los parques nacionales del país, lo que implica la degradación acelerada del medio ambiente, y a su vez añade dificultades en el desarrollo de estas áreas (DNP, 2019).

El acuerdo firmado con las FARC incluye el desmantelamiento de economías ilícitas y un aumento del control estatal para acabar con el blanqueo de capitales. Para esto, se acordaron una serie de medidas en las que las FARC se comprometen a mantener un papel activo para contribuir a solucionar el problema de las drogas ilícitas, aportando información sobre toda la cadena de valor del narcotráfico, los sistemas de financiación, el uso de recursos, las estrategias para el lavado de activos, etc. A su vez, se acordó la implementación de un nuevo estatuto para la prevención y la lucha contra las finanzas ilícitas que aporta un enfoque territorial para fortalecer el marco legal y reforzar las instituciones y autoridades. Con este nuevo estatuto se pretende impulsar la investigación y el control financiero, y establecer protocolos de actuación contra el lavado de activos y el blanqueo de capitales (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016b). El anexo 8 aporta algunas de las principales consecuencias que tiene el lavado de activos para el conjunto de la economía.

Con estas medidas se espera que se pueda acabar de forma efectiva con el tráfico ilegal y por consiguiente con la financiación ilegal de los grupos criminales, sin embargo, para conseguir este objetivo es esencial el fortalecimiento efectivo de las instituciones del Estado en las áreas rurales y brindar a la población de los medios necesarios para conseguir un mayor desarrollo, como son una infraestructura de calidad, servicios públicos de sanidad y educación o un aumento de la inversión pública en el sector agropecuario que contribuya a la mejora de su rendimiento.



Fuente: DNP, 2019

#### 4. Medidas económicas incluidas en el acuerdo

A pesar de que la base fundamental del acuerdo es el fin del conflicto armado y la transición pacífica de las FARC hacia un partido político dentro de las normas democráticas, también se abordan dos temas que tienen una gran implicación económica para el país. Al tratarse de una economía basada principalmente en la producción agrícola, y debido a que el conflicto se ha concentrado principalmente en las áreas rurales del país, las medidas económicas de acuerdo se centran en el ámbito rural y el sector agropecuario. Las dos principales reformas introducidas por el acuerdo son la implementación de una Reforma Rural Integral y la búsqueda de una solución al problema del narcotráfico.

##### I. Reforma Rural Integral

Una de las causas del conflicto y razón también de su prolongada duración es la gran desigualdad entre las áreas rurales y las urbanas, la periferia social ha sido la gran olvidada y esto ha tenido graves consecuencias para su desarrollo, en respuesta a esto, el acuerdo promete una profunda transformación rural que reduzca el excesivo poder económico y político de las élites rurales (Felbab-Brown, 2016). El acuerdo se ha marcado como objetivo la erradicación de la pobreza rural extrema y la reducción de la pobreza en el campo en un 50% en un plazo de 10 años. Además también se propone la reactivación del campo, el desarrollo de la agricultura para reducir la desigualdad entre la población urbana y rural, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a), sin embargo, en comparación con la reforma agraria de 1967, esta ha sido calificada de menos ambiciosa (Orlando, 2016) por lo que se plantean dudas sobre su efectividad. Las medidas que se

acordaron llevar a cabo se dividen en dos bloques: el acceso y uso de la tierra y planes nacionales sectoriales.

Respecto al acceso y uso de la tierra, la principal medida es la creación de un Fondo de tierras para que se pueda distribuir propiedades gratuitamente a aquellos campesinos sin tierras o a aquellos que tengan tierras insuficientes, para esto se consideró prioritaria la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a). Este fondo está constituido por las propiedades que han llegado a manos del Estado debido a diversas circunstancias: delitos, adquisición irregular, ausencia de explotación, etc. El acuerdo estipula que hay tres millones de hectáreas en estas circunstancias, sin embargo, gran parte de estas propiedades tienen pendientes complejos procesos judiciales que podrían retrasar su disponibilidad, y otras pueden pasar a formar parte de reservas naturales y por tanto no ser explotadas. De manera adicional al Fondo de tierras, se acordó la concesión de subsidios y créditos para la compra de tierras. Se estima que si en 2021 se hubieran creado 100.000 fincas de 10 hectáreas de media, se crearía la base para impulsar la economía agraria del país (Orlando, 2016), sin embargo, hasta el momento, la consolidación de esta reforma es muy débil, lo que hace difícil que se alcance este objetivo.

Además, con el fin de que esta tierra sea productiva, se buscó un acceso integral, es decir, que también se proporcione a los campesinos sistemas de riego, asistencia técnica, asistencia para comercialización y todo lo necesario para que la tierra se pueda explotar de manera eficiente y proporcione ingresos (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a). Ya había iniciativas previas al acuerdo destinadas a solucionar este problema, sin embargo, no han llegado a consolidarse y el uso eficiente del suelo sigue siendo un reto pendiente para la economía colombiana.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, solo un 37,4% de los hogares rurales tiene acceso a tierra, y de estos un 59% presenta informalidades en la propiedad (DNP, 2019). En respuesta a esta situación, el acuerdo integra un plan que permita a los pequeños y medianos propietarios obtener las escrituras formales de sus terrenos, además de la creación de un catastro que permita regularizar las propiedades de manera transparente y a su vez aumentar la recaudación de impuestos. El acuerdo prevé dar títulos de propiedad a siete millones de hectáreas, sin embargo, respecto al catastro, que lleva aprobado en la ley 150 años, se necesita una mayor voluntad política para regularizar toda esa situación, ya que a día de hoy el 74% de los municipios continúan con un catastro desactualizado (DNP, 2019). Además, con el fin de garantizar la seguridad

jurídica de estas medidas, se acordó la creación de una jurisdicción agraria para resolver disputas sobre el uso y la tenencia de tierras y proteger los derechos de los campesinos

Al mismo tiempo, esta reforma pretende conseguir una mayor protección de zonas de interés ambiental con el fin de proteger los recursos medio ambientales y la biodiversidad del país. Por lo tanto, se acordó la definición de las fronteras entre territorio agrario y reservas naturales como indica la ley desde hace más de dos décadas, y el fomento de planes que contribuyan a la preservación (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a). Además, se prometió el desarrollo de zonas de reserva campesina para aumentar la presencia del Estado en las zonas rurales. A pesar de que aún existen deficiencias y cuellos de botella organizativos que limitan la gestión eficiente de las instituciones del sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura está fortaleciendo su papel y liderazgo en la formulación de políticas de desarrollo rural y sectorial (DNP, 2019).

Por otro lado, los planes nacionales sectoriales, el segundo pilar de la Reforma Rural, se centran en 3 ámbitos principales: el desarrollo de infraestructura, el desarrollo social y estímulos a la productividad. El desarrollo de infraestructuras supone la creación de vías terciarias para mejorar el acceso y la integración regional a la vez que se pretende conectar la producción agrícola a los mercados y mejorar la competitividad, ya que el 75% de la red vial terciaria está deteriorada (DNP, 2016). A su vez, para garantizar el uso equitativo y sostenible del agua se acordó establecer distritos de regadío y se pactó una ampliación de la red eléctrica y de internet mediante la construcción de torres eléctricas, de telecomunicaciones y de conexión inalámbrica. Respecto al desarrollo social, se acordó garantizar la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud y educación en las áreas rurales. A su vez se trabaja para garantizar el acceso a agua potable y la mejora de la vivienda y la calidad de vida en estas zonas, el gobierno es consciente de que no es suficiente con el reparto de tierra, sino que se deben incluir todos estos aspectos para que se produzca un impulso real de las zonas rurales, sin embargo, cabe señalar que estas medidas se han propuesto en leyes anteriores de reforma agraria pero nunca se han llegado a aplicar de manera eficiente (Orlando, 2016).

Con el objetivo de estimular la productividad se acordó impulsar la economía cooperativa para acercar a productores y consumidores, además de crear un plan para incentivar la comercialización de productos agrícolas, ya que existen varias limitaciones para su posicionamiento entre los que destacan el abundante número de intermediarios, la volatilidad de precios y la incapacidad de los pequeños productores de comercializar grandes volúmenes de producción. Respecto a las exportaciones, a pesar de que en 2017



la balanza comercial registró un superávit de 1.618 de dólares, es necesaria una mayor diversificación, tanto de productos como de mercados, ya que únicamente nueve productos supusieron el 86% de las exportaciones, y el 54% se concentraron en 4 mercados a pesar de que Colombia es parte de 16 tratados de libre comercio (DNP, 2019).

## II. Solución al problema de las drogas ilícitas

El objetivo principal de esta reforma es que, de forma voluntaria, se sustituyan los cultivos ilícitos por cultivos agrarios legales y productivos. Esto requiere una profunda transformación en las zonas afectadas y un aumento del bienestar que incentive a los productores, cuya subsistencia depende del cultivo ilegal, a cambiar su producción. Por lo tanto, los cultivadores no serán penalizados, sino que el foco está en perseguir el tráfico y el procesamiento. Se acordaron planes de asistencia inmediata para garantizar la seguridad alimentaria, tanto de las personas relacionadas directamente con el cultivo como para la comunidad en general. De esta manera se incentivará el cultivo de otros productos, ya que la subsistencia de las comunidades no dependerá de los ingresos producidos por el cultivo ilícito (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a).

Sin embargo, la principal medida para hacer frente a este problema es la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución para los cultivos de uso ilícito que forma parte de la Reforma Rural Integral. Para establecer este plan, las comunidades deben comprometerse a la sustitución voluntaria de estos cultivos, y si no es el caso, o se incumple lo acordado, el gobierno podrá retirar los cultivos de forma manual. El objetivo de programa es que, trabajando junto con las comunidades, se pueda resolver de manera definitiva el problema del cultivo ilícito, para lo cual se debe llevar a cabo una transformación de las condiciones de las áreas afectadas, fomentando la integración territorial y la inclusión social. También se hace hincapié en la presencia del Estado, garantizando un mejor acceso e infraestructuras a las comunidades afectadas y, al mismo tiempo, garantizando que estas comunidades tengan un papel importante en la toma de decisiones, por lo que se acordó el establecimiento de una planeación participativa en la que los afectados formaran parte de la toma de decisiones, y así fortalecer también la relación entre las comunidades y las autoridades. Al mismo tiempo, este programa incluye medidas para la recuperación de parques naturales y zonas protegidas afectadas por este problema (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a).

Más allá de las zonas rurales y del cultivo, se quiere poner fin a todo el proceso de producción y comercialización de narcóticos, lo requiere un mayor esfuerzo para

desarticular las redes de crimen organizado, por lo que se han diseñado estrategias centradas en la localización, investigación y desmantelamiento de estos grupos, poniendo especial atención en tres ámbitos: la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de insumos. En este proceso es donde las FARC podría adoptar un papel más importante, ya que, a pesar de que el acuerdo dictamina que el grupo se compromete a contribuir de manera efectiva a solucionar el problema y a terminar cualquier relación que hayan tenido con el narcotráfico, no se incluye ningún compromiso ni obligación específicos. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016a).

Respecto a los costes que supondría la implementación del acuerdo, a pesar de que aparentemente estas medidas supondrán un aumento de gastos para el Estado, en realidad se prevé que no se exceda de los costes de proyectos sociales ya existentes, por lo que la implementación de estas reformas no debería suponer un aumento del déficit. Por otro lado, el acuerdo de paz también incluye el pago de subsidios a excombatientes de las FARC que sí supondría un coste, ya que se estima que el pago del 90% del salario mínimo durante dos años a 10.000 exguerrilleros más el pago inicial de 8 millones de pesos supone un total de 95 millones de dólares. Sin embargo, cabe señalar que este coste es menor que el de la celebración del referéndum, que fueron 100 millones de dólares. Respecto a los costes en seguridad y en justicia, por el momento se han mantenido a los mismo niveles que antes de la paz, pero se prevé que en el medio plazo vayan reduciéndose progresivamente, tanto en seguridad pública como privada (Orlando, 2016)

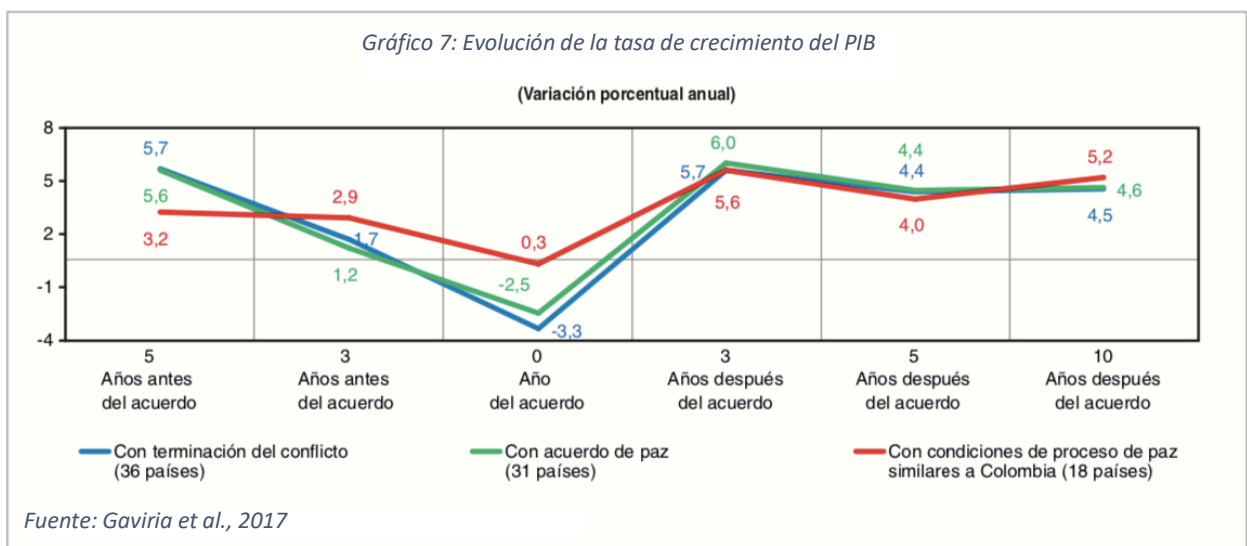
En definitiva, el acuerdo define una gran cantidad de compromisos y objetivos para impulsar el sector agrario colombiano, terminar con la presión rural por el problema de la tierra y reducir las actividades ilegales de los grupos organizados. Sin embargo, algunos datos reflejan que, en estos dos primeros años de posconflicto, aunque se han llevado a cabo ciertos progresos, no se ha avanzado al ritmo esperado y puede que muchos de estos planes no terminen de cumplir los objetivos deseados debido a la elevada burocracia y la falta de voluntad política.

## 5. Comparación del caso colombiano con otros procesos de paz similares

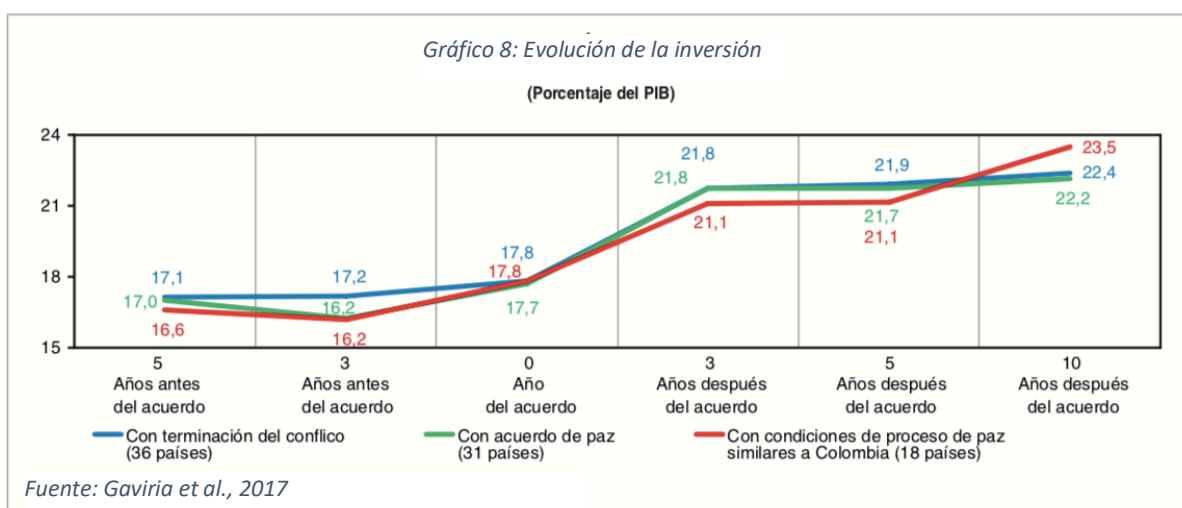
Una vez analizado el impacto del conflicto en la economía y las medidas previstas para impulsar el crecimiento y la competitividad de Colombia, es interesante el análisis de casos similares para poder entender y prever el futuro de la economía colombiana una

vez conseguida la paz. Para definir exactamente qué procesos de paz son similares al colombiano se ha empleado la misma metodología que Gaviria et al. (2017), en su estudio, en el que, partiendo de 117 casos de conflictos armados se obtuvo una muestra de 36 casos en los que se puso fin al conflicto armado, de los cuales, en 31 se obtuvo un acuerdo de paz, mientras que en 5 el fin del conflicto se produjo por una victoria militar (Anexo 9). Una vez se obtuvo esta muestra, se aplicaron varios filtros para destacar aquellos cuyos acuerdos tuvieran una mayor similitud al acuerdo colombiano (Anexo 10), el primer filtro es el cumplimiento de al menos cinco variables que también estuvieran incluidas en el caso colombiano, el segundo filtro buscaba obtener aquellos países con una intensidad del conflicto similar a la de Colombia, por último, se eliminaron aquellos en los que hubiera habido una intervención extranjera. La muestra final queda constituida por 18 casos, que se muestran en el anexo 11. Una vez definida esta muestra, podemos asumir que la tendencia general que experimentaron las economías de estos países al alcanzar la paz es similar a lo que cabría esperar de la economía colombiana en los próximos años.

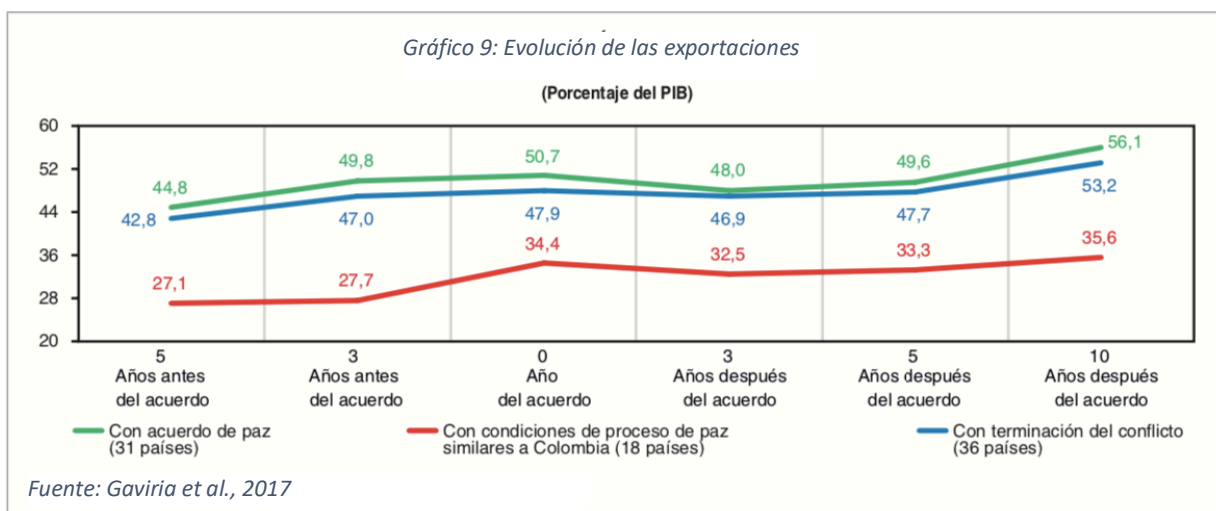
Si bien es cierto que en los años anteriores al acuerdo las economías estudiadas presentan tasas de crecimiento positivas, es probable que esto se deba al efecto multiplicador del elevado gasto militar, por tanto, en el año de finalización del conflicto el crecimiento de estas economías pasó a ser negativo o nulo debido al hundimiento económico causado por la violencia, sin embargo, durante los años siguientes estas tasas repuntaron de manera muy significativa. De media se registraron unas tasas de crecimiento de entre 1,1 y 1,9 puntos del PIB, siendo más alta en aquellos casos similares al colombiano (Gaviria et al., 2017).



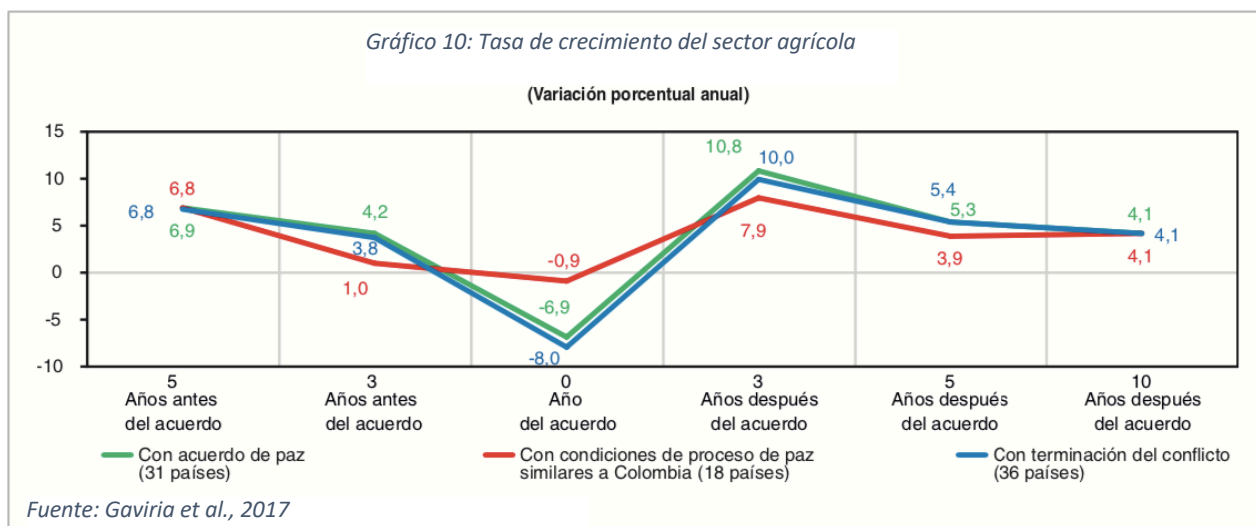
Respecto a la inversión, el impacto de la paz es más significativo en este caso debido al aumento de la confianza que tendrán los inversores ante una situación de estabilidad política, por lo que presenta una tasa de crecimiento más alta que la del PIB. De media se registraron unas tasas de inversión superiores al 30%, además, la relación entre la inversión y el PIB creció en torno a los 5 puntos porcentuales. Por consiguiente, la inversión extranjera directa (IED) también se vio afectada de forma positiva, a pesar de llegar a su nivel más bajo en el año del acuerdo, una vez terminado el conflicto tuvo un comportamiento creciente y sostenido, de entre 3,1 y 3,7 puntos porcentuales del PIB, llegando a triplicarse la relación entre IED y PIB a los diez años de la firma del acuerdo (Gaviria et al., 2017).



Es de especial relevancia hacer referencia a las exportaciones y al sector agrícola, ya que son dos importantes pilares sobre los que se sustenta la economía colombiana. Respecto a las primeras, muestran una tendencia al crecimiento en los años anteriores al acuerdo, pero una vez firmado, registran un leve descenso debido al proceso de recuperación económica y la transformación del modelo productivo. Sin embargo, después de tres años, el nivel de exportaciones tiende a recuperarse y consolidarse a los diez años. En este caso también son los países con procesos similares al colombiano los que presentan un mayor aumento de las exportaciones como porcentaje del PIB, un 6,4 (Gaviria et al., 2017).



Por su parte, el sector agrícola presenta tasas de crecimiento positivas pero decrecientes antes del acuerdo, el año del acuerdo supone un decrecimiento como consecuencia de la baja producción, y el deterioro ambiental debidos al conflicto, y finalmente se produce un repunte tras la firma del acuerdo, especialmente en los tres años posteriores, este aumento de la productividad se estabiliza y sostiene en los años siguientes, se estima que la tasa de crecimiento aumenta entre un 1,2 y un 1,4 puntos porcentuales adicionales, siendo mayor en los 18 países que más similitudes tienen con el proceso colombiano (Gaviria et al., 2017).



Por otro lado, en el estudio de Ruiz, Galeano, & Gil (2016), se establecen tres posibles escenarios para el posconflicto basados en casos que tengan las siguientes dos características en común con el colombiano: un proceso paz entre en gobierno y una guerrilla interna y más de veinte años de conflicto con dicha guerrilla. Los autores

escogen una muestra de seis casos y los dividen en aquellos con un escenario optimista, en el que hubo un acuerdo exitoso entre la guerrilla y el gobierno, formados por El Salvador, Angola y Guatemala, y el escenario pesimista para aquellos casos en los que no se llegó a un acuerdo: Perú y Sri Lanka. Una vez analizados los datos plantean tres escenarios para Colombia: optimista, neutro, que implicaría una ruptura de las negociaciones, y pesimista (Ruiz et al., 2016). En este caso nos centraremos en el escenario optimista, ya que se ha llegado a la firma del acuerdo.

Por lo tanto, los países que experimentaron el escenario optimista tuvieron un crecimiento del comercio internacional de entre el 16% y el 28% del PIB, excepto en Angola donde decreció un 15,52%, a pesar de que aumentó la balanza comercial de bienes y servicios. Respecto al riesgo país, la imagen internacional para inversores también mejoró para los países centroamericanos, mientras que en Angola disminuyó en 8,65 puntos. Estas diferencias se deben a la distinta administración económica, y la diferente influencia que ha supuesto el conflicto para cada país, además del interés de la comunidad internacional por invertir en estos países. Por el contrario, el crecimiento del PIB solo se incrementó en Angola, mientras que en Guatemala y El Salvador disminuyó. De esta manera, los autores prevén que en Colombia la paz podría traer un aumento de entre el 3% y el 6% de superávit comercial debido al gran potencial exportador del país y la presencia de materias primas, llevando a un crecimiento del comercio de entre el 10% y el 15%, además, la inversión extranjera aumentaría entre un 40% y un 50%, y el PIB entre el 5% y el 7% anual impulsado por el desarrollo empresarial y el sector agrícola entre otros. Por otro lado, cabe señalar que respecto a las estimaciones sobre el gasto militar no se puede afirmar que en Colombia este disminuya en la misma medida que en otros casos, ya que continúan existiendo grupos armados ilegales, y por tanto en lugar de reducir este gasto un 40% ó 50% como sería previsible, se estima que únicamente se reducirá en un 10% (Ruiz et al., 2016).

Tras analizar el impacto económico del posconflicto en casos similares, podemos concluir que, en términos económicos, la solución adoptada por el gobierno colombiano de llegar a un acuerdo de paz es la más beneficiosa en términos económicos, ya que son los países con acuerdos similares los que han presentado un crecimiento más notable en el período de posconflicto. Cabe además señalar que las medidas económicas del acuerdo, centradas en el desarrollo rural, permiten un crecimiento exponencial de las exportaciones debido al enorme potencial del sector, que no se ha podido desarrollar debido al conflicto. Es precisamente esta apertura al exterior, tanto en términos comerciales como de

inversión, la que supondría el principal impulso para la economía colombiana. Por tanto, la firma del acuerdo presenta una serie de oportunidades para el desarrollo de la economía colombiana, que de ser aprovechadas pueden reducir importantes problemas como la desigualdad o la falta de institucionalidad, y convertir a Colombia en una economía de referencia en la región.

## 6. Conclusiones y recomendaciones

El acuerdo de paz que ha conseguido poner fin a más de medio siglo de conflicto civil supone también la posibilidad de iniciar una nueva era de crecimiento. Se pretende que las áreas rurales sean más seguras y se desarrollen, que se mejore y modernice la infraestructura, y que se favorezca la inversión extranjera directa y el turismo. Además, la estabilidad fomenta que ciudadanos colombianos viviendo en el extranjero puedan volver al país a trabajar o emprender y se prevé un crecimiento de prácticamente todos los sectores (Vietor, 2016).

Si bien es cierto que se prevé que los efectos del acuerdo sean muy beneficiosos para el país, hay que tener en cuenta que la magnitud de estos efectos dependerá siempre de las políticas económicas que se implementen y de la efectividad con la que se lleven a cabo las medidas acordadas. El acuerdo reconoce el problema de la tierra en las áreas rurales como un factor determinante para el estallido del conflicto y que a su vez contribuyó a la permanencia de este a lo largo de los años, por esta razón se hace hincapié en solucionar este problema. Sin embargo, tras el análisis llevado a cabo en esta investigación, se ha comprobado como los avances no han resultado realmente satisfactorios, además, cabe señalar que la transformación prometida en el acuerdo supone una gran complejidad y altos costes, por lo que pueden pasar décadas hasta que se llegue a completar (Felbab-Brown, 2016). Estos factores suponen que, tras dos años desde la firma del acuerdo, las perspectivas económicas para Colombia sean algo más pesimistas que en 2016.

En la actualidad, Colombia es uno de los países que más crecimiento presenta de la región, y con las políticas actuales se estima que este crecimiento puede perdurar en el tiempo (OCDE, 2017), sin embargo, las previsiones destacan que el dividendo de la paz no se dará de forma inmediata, ya que el país sigue enfrentándose a una serie de retos para consolidar la sostenibilidad de la paz y el crecimiento económico (Grupo Bancolombia, 2017). Uno de los retos más importantes es la gran desigualdad que está

presente en el país, por lo que se deben tomar medidas para fomentar que el crecimiento actual sea inclusivo y reduzca la brecha entre la población urbana y la rural. A pesar de que el crecimiento de los últimos años y las políticas destinadas a la población más vulnerable han reducido las tasas de pobreza absoluta, la pobreza relativa sigue siendo superior a la media de la OCDE y de otros países de la región, esto se debe a la desigualdad en el acceso a servicios públicos (OCDE, 2017). Las dos áreas principales en las que se debe actuar para reducir esta desigualdad son el acceso a la educación y la asistencia sanitaria, en las que, a pesar de grandes esfuerzos previos, continúa habiendo grandes limitaciones para ciertos sectores de la población.

La educación es uno de los ámbitos más relevantes para fomentar el desarrollo a largo plazo, ya que la imposibilidad de ciertos grupos de población para acceder a educación provoca que se perpetúen los desequilibrios económicos y la desigualdad, limitando también el crecimiento del país. Algunas ambiciosas iniciativas, como la educación pública gratuita o grandes inversiones en infraestructura y recursos educativos han permitido un aumento de las tasas de escolarización, sin embargo, la calidad educativa sigue siendo baja en comparación con el resto de los países de la OCDE, esto provoca a su vez una menor productividad de la economía debido a la falta de conocimientos para acceder al mercado laboral. Una mayor inversión en educación destinada a reducir el abandono escolar podría mejorar el rendimiento educativo y reducir las diferencias entre las regiones del país (OCDE, 2017).

Por otro lado, la cobertura sanitaria y el acceso a servicios de salud varía considerablemente dependiendo del nivel socioeconómico y las regiones del país. Esto se debe a las dificultades de comunicaciones de algunas áreas del país, que provocan una escasez de centros médicos y de profesionales, además de deficiencias y altos costes de acceso y transporte (OCDE, 2017). Por lo tanto, hasta que no se afronten estos desafíos, y se cumplan las medidas destinadas a aumentar el bienestar y los medios de la población rural, el crecimiento económico quedará limitado por un aumento de la desigualdad del país.

Otra reforma necesaria que permitiría que el crecimiento del posconflicto sea más inclusivo es una reforma tributaria, ya que el impuesto actual a la renta empresarial es muy elevado y por tanto supone una limitación al crecimiento y fomenta la informalidad de la economía. Además, un sistema tributario más progresivo favorecería una mayor redistribución de los ingresos para reducir la desigualdad. Si bien es cierto que en 2016 se llevó a cabo una reforma con el propósito de aumentar la equidad, sigue habiendo



medidas que no fueron introducidas y son necesarias, como una ampliación de la base del impuesto a la renta de las personas, o la disminución del impuesto de sociedades (OCDE, 2017).

Por otro lado, y con el fin de aprovechar al máximo el dividendo de la paz y reducir la desigualdad en el largo plazo, serían convenientes reformas estructurales destinadas a aumentar el paso económico de los sectores con más potencial de crecimiento, es decir, el agropecuario y el industrial al mismo tiempo que se reduce el de otros sectores, como el minero, que además repercutiría en un menor impacto medioambiental. Una mejora en gestión de la producción agrícola como promete el acuerdo supondría no solo un mayor autoabastecimiento, ya que importa unas 11 toneladas de alimentos a pesar de tener producción interna, sino que también sería una importante fuente de crecimiento. Los estudios apuntan a que se podría conseguir un crecimiento adicional del 3%, llegando a entre el 8% y el 10% en las zonas de conflicto (Acosta, 2016).

A pesar de que en los dos años de posconflicto se han llevado a cabo algunos avances en las medidas mencionadas, lo cierto es que la falta de progresos en algunos aspectos hace que aquellos más escépticos consideren la poca voluntad política como una señal de que el gobierno puede no llegar a cumplir lo prometido, que en el peor de los casos podría llevar a un aumento de la desigualdad y con ella una escalada también de la violencia. Por esta razón, es importante que se trabaje para mejorar la situación de las zonas rurales y se lleven a cabo avances tangibles que denoten el compromiso del Estado.

También es importante tener en cuenta que la trayectoria económica del país también está influenciada por el contexto exterior. A pesar del aumento en la inversión que conlleva la paz, tendencias macroeconómicas regionales y globales, como el proteccionismo comercial o la tendencia a la baja en la inversión puede limitar el potencial de crecimiento de la economía colombiana en el posconflicto.

## Bibliografía

- Acosta, J. (2016). Los Retos de la Economía tras el fin del Conflicto. *Portafolio.Com*. Retrieved from <http://www.portafolio.co/economia/retos-de-la-economia-colombiana-tras-el-acuerdo-de-paz-499846#>
- Álvarez, S., & Rettberg, A. (2008). Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. *Colombia Internacional*, 67, 14–37. Retrieved from <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint67.2008.01>
- Banco Mundial. (2014). *Colombia Policy Notes: Towards Sustainable Peace, Poverty Eradication and Shared Prosperity*. Washington, DC.
- Caballero, C. (2002). La Estrategia de Seguridad Democrática y la Economía Colombiana: Un Ensayo Sobre la Macroeconomía de la Seguridad. *Lecturas Dominicales*, 43. Retrieved from <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra234.pdf>
- Cairns, E. (1997). *A Safer Future: Reducing the Human Cost of Conflict*. Oxford: Oxfam Publications.
- Cárdenas-Santamaría, M. (2007). Economic Growth in Colombia: a reversal of “Fortune”? *Ensayos Sobre Política Económica*, (53), 220–259. <https://doi.org/10.32468/espe.5305>
- Cárdenas, M., Cadena, X., & Caballero, C. (2005). Análisis del incremento en el gasto en defensa y seguridad: Resultados y sostenibilidad de la estrategia. *Coyuntura Económica*, 25(1).
- Collier, P. (1999). On the Economic Consequences of Civil War. *Oxford Economic Papers*, 51, 168–183. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1667188>
- Collier, P., & Gunning, J. W. (1995). War, peace and private portfolios. *World Development*, 23(2), 233–241. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)00126-J](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)00126-J)
- Collier, P., & Hoeffler, A. (1998). On economic causes of civil war. *Oxford Economic Papers*, 50(4), 563–573. <https://doi.org/10.1093/oep/50.4.563>
- DNP. (2016). *Documento CONPES 3857: lineamientos de política para la gestión de la red terciaria*. Bogotá, Colombia.
- DNP. (2019). *Bases de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022*. Bogotá, Colombia.
- Felbab-Brown, V. (2016). ¿Quién paga por la paz en Colombia? *Revista de Economía*

- Institucional*, 18(35), 13–38. <https://doi.org/10.18601/01245996.v18n35.02>
- Gaviria, S., Mejía, L. F., Piraquive, G., Cifuentes, G., López, R., & Parra, Y. (2017). El Dividendo Económico de la Paz en Colombia : Lecciones de la Experiencia Internacional. *Boletín Económico de ICE* 3089, 39–53.
- González, F., & Posada, C. E. (2001). Criminalidad, violencia y gasto público en defensa, justicia y seguridad en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 3(4), 78–102. Retrieved from <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/273>
- Grupo Bancolombia. (2017). El posconflicto y el crecimiento económico: efecto positivo, pero moderado. Retrieved from <https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/entorno-empresarial/actualidad-economica-sectorial/posconflicto-y-crecimiento-economico-efecto-positivo--moderado>
- Grupo de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Centro Nacional de Memoria Histórica. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Hoeffler, a, & Reynal-Querol, M. (2003). Measuring the costs of conflict. *The World Bank*, (March), 1–22.
- Hofstetter, M. (2016). Paz y PIB. *Documentos Cede*, (19). <https://doi.org/10.2139>
- Humphreys, M. (2003). *Economics and war*. <https://doi.org/10.1080/00358533508450748>
- Ibáñez, A. M., & Jaramillo, C. (2006). Oportunidades de desarrollo económico en el posconflicto: propuesta de política. *Coyuntura Económica*, 36(2), 93–127.
- Iberoeconomía. (2018). ¿Cuáles son los principales productores petroleros de Latinoamérica? Retrieved February 14, 2019, from <https://iberoeconomia.es/internacional/cuales-los-principales-productores-petroleros-latinoamerica/>
- Keen, D. (2001). The Political Economy of War. In F. Stewart & V. Fitzgerald (Eds.), *War and Underdevelopment: Volume 1: The Economic and Social Consequences of Conflict* (pp. 45–66). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199241866.001.0001>
- Lafuente, J., Palomino, S., & Marcos, A. (2016). Colombia: El Camino a La Paz. *El País*, p. 10. Retrieved from <https://elpais.com/especiales/2016/proceso-de-paz-en-colombia/>

- OCDE. (2017). *Estudios Económicos de la OCDE Colombia - 2017. Enero*.  
<http://doi.org/10.1787/9789264227682-es>
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016a). *El Acuerdo Final de paz - Cartilla. El Acuerdo Final de Paz: la oportunidad para construir paz*. Retrieved from  
[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo\\_entere\\_version\\_6\\_Sep\\_final\\_web.pdf](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_entere_version_6_Sep_final_web.pdf)
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016b). *Las finanzas ilícitas en el Acuerdo de paz*. Bogotá, Colombia. Retrieved from  
<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Documentos/compartidos/cartilla-finanzas-oacp-16mayo.pdf>
- Orlando, J. (2016). Resumen del acuerdo de paz. *Revista de Economía Institucional*, 18(35), 319–337.
- Otero Prada, D. (2008). Experiencias de investigación: Las cifras del conflicto colombiano.
- Pinto, M. E., Vergara, A., & Lahuerta, Y. (2005). Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003. *Archivos De Economía*, 1–39. Retrieved from  
<https://www.dnp.gov.co/EstudiosEconomicos/ArchivosdeEconomía.aspx>  
<http://www.dotec-colombia.org/index.php/series/118-departamento-nacional-de-planeacion/archivos-de-economia>
- Ramirez Montañez, J. C. (2017). Fifteen Years of Plan Colombia (2001-2016) The Recovery of a Weak State and the Submission of Narco-terrorist Groups? *Analecta Politica*, 7(13), 315–332. <https://doi.org/10.18566/apolit.v7n13.a05>
- Ramos, J., Polo, J., Rodriguez, G., Sanabria, N., & Moreno, J. (2017). Conflicto-economía y postconflicto: evidencia para el caribe colombiano. *Revista de Paz y Conflictos*, 10(2), 117–142. Retrieved from  
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205054523006>
- Rettberg, A. (2008). *Explorando el dividendo de la paz: Impactos del conflicto armado colombiano. Resultados de una encuesta nacional*. Bogotá, Colombia.
- Rocha, R. (2001). La Economía Colombiana tras 25 Años de Narcotráfico. In A. Martínez Ortiz (Ed.), *Economía, Crimen y Conflicto* (pp. 221–233). Bogotá, Colombia: Ediciones Antropos Ltda.
- Ross, M. L. (2004). How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases. *International Organization*, 58(01).  
<https://doi.org/10.1017/s002081830458102x>

- Rotberg, R. (2007). *Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso Siglo*. (Universidad de los Andes & Universidad Javeriana, Eds.). Bogotá, Colombia.
- Rubio, M. (1997). *Los costos de la violencia en Colombia*. Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico. Retrieved from [http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones\\_y\\_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos\\_cede/ant/los\\_costos\\_de\\_la\\_violencia\\_en\\_colombia](http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/ant/los_costos_de_la_violencia_en_colombia)
- Ruiz, M. I., Galeano, J. S., & Gil, E. O. (2016). Posconflicto colombiano y sus efectos económicos. *Revista CIFE: Lecturas de Economía Social*, 17(27), 23–54.
- Sarmiento, L. (2018). Petróleo , paz inconclusa y nueva lógica del conflicto. *Ciencia Política*, 13(25), 67–92.
- Stewart, F., & Fitzgerald, V. (2001). *War and Underdevelopment: Volume 1: The Economic and Social Consequences of Conflict*. (F. Stewart & V. Fitzgerald, Eds.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof>
- The Heritage Foundation. (2019). *2019 Index of Economic Freedom*.
- Vietor, R. H. K. (2016). With Peace, Colombia Is Poised for Greater Prosperity. *Harvard Business Review*, July, 1–5. Retrieved from <https://hbr.org/2016/07/77-with-peace-colombia-poised-for-greater-prosperity>

## Anexos

### Anexo 1: Costes directos e indirectos

<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>
<p><b>Costos generados por daños a la infraestructura física</b></p> <p>Eléctrica (atentados a torres y líneas de conexión eléctrica)</p> <p>Petrolera (atentados contra oleoductos)</p> <p>Telecomunicaciones (ataques a redes de comunicación)</p> <p>Sector de producción de carbón (atentados a las vías férreas)</p> <p>Estructura vial (ataques a puentes, peajes y vías férreas)</p> <p><b>Costos generados por el secuestro</b></p> <p>Pago de rescates</p> <p>Gastos del Estado para controlarlo y prevenirlo</p> <p><b>Costos generados por el abigeato</b></p> <p>—robo de ganado— y pago de extorsiones</p> <p><b>Costos generados por el desplazamiento forzado</b></p> <p>Gastos del Estado (asistencia económica a la población desplazada)</p> <p><b>Costos generados por el uso de minas antipersonal</b></p> <p>Gastos del Estado (indemnizaciones a población afectada y gastos para destruir las minas antipersonal)</p> <p><b>Gastos en defensa y seguridad</b></p> <p>Gastos del Estado (remuneraciones y asignaciones a personal militar, adquisición de nuevos equipos, operaciones y mantenimiento)</p>	<p><b>Pérdidas de productividad</b></p> <p>Alteración en la administración eficiente de los negocios y las empresas en general</p> <p>Pérdida de capital humano y productividad por inasistencia laboral</p> <p>Pérdida de productividad de tierras</p> <p>Disminución o desvío de la inversión</p> <p>Fuga de capitales</p> <p>Disminución en la inversión de tecnología y capital físico</p> <p>Inadecuada asignación de recursos (representan un costo de oportunidad para la economía)</p> <p>Seguridad privada</p> <p>Pago por incapacidades e indemnizaciones</p> <p>Seguros relacionados con la seguridad</p> <p>Aumento de los costos de transacción</p> <p>Incertidumbre sobre las reglas de juego, intercambios y contratos.</p> <p>Impacto sobre la distribución</p> <p>Distribución del ingreso y la riqueza (propiedad privada)</p> <p>Impacto sobre la pobreza</p>

Fuente: Álvarez y Rettberg (2008)

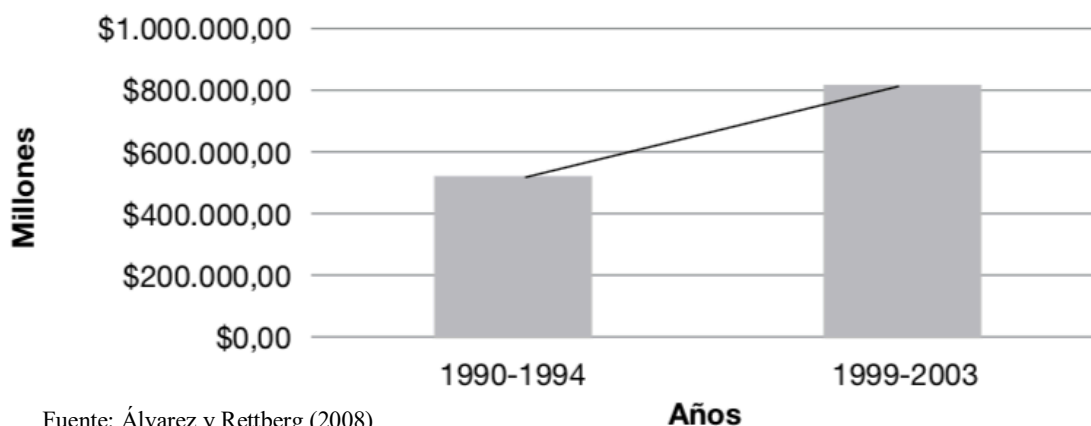
Anexo 2: Gasto Público Militar de Colombia, 1990 – 2014. Cifras en millones de dólares constantes de 2011

PAISES	AÑOS									Crecimiento prom. anual 1990 - 2014	% del PIB (2014)
	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014		
Colombia	2,661	4,727	6,077	8,011	11,072	10,307	11,031	12,489	13,061	6.9%	3.4%
Chile	2,266	2,734	3,329	4,335	5,131	5,440	5,347	5,255	5,545	3.8%	2.0%
Mexico	2,643	3,468	4,131	4,081	6,203	6,471	7,106	7,456	8,255	4.9%	0.7%
Peru [*]	54	1,491	1,509	1,632	2,074	2,026	2,198	2,724	2,621	4.0%	1.4%
Argentina	2,519	2,513	2,170	2,028	3,606	4,052	4,578	5,607	6,083	3.7%	1.0%
Brasil	19,490	22,856	25,178	26,505	38,132	36,936	37,647	37,948	37,290	2.7%	1.4%
Venezuela [*]	<i>n.d.</i>	2,662	2,611	3,615	2,552	2,385	4,101	4,400	2,921	0.5%	1.1%
Estados Unidos	527,097	411,631	394,097	579,768	720,220	711,338	670,897	617,687	577,511	0.4%	3.5%

[\*] El crecimiento promedio anual de Perú se midió desde el año 2000 y el de Venezuela desde 1995.

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI Military Expenditures Database, 2014

Anexo 3: Costes generados por los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas



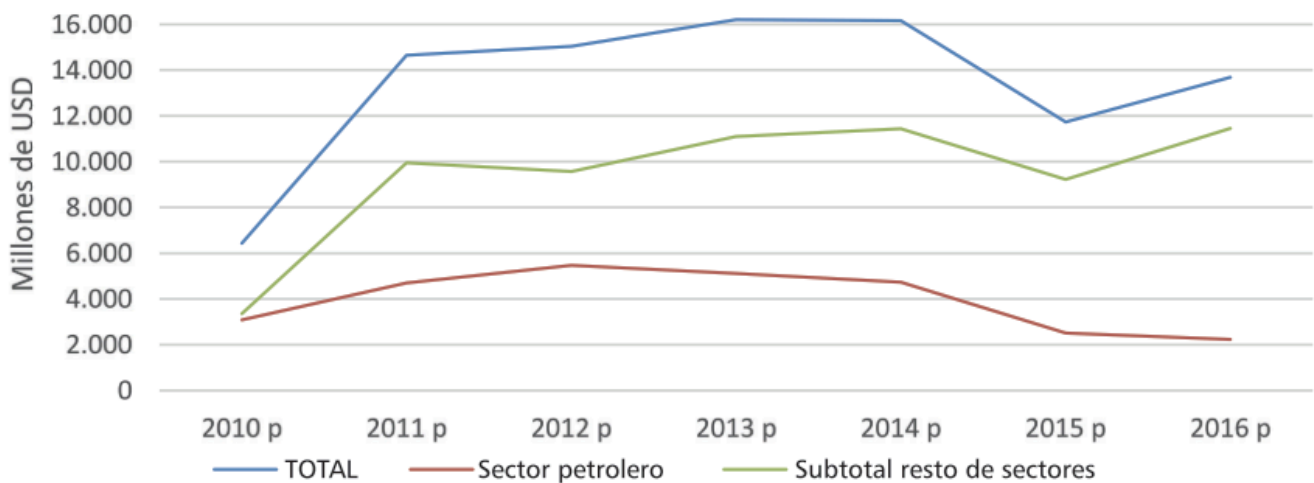
Fuente: Álvarez y Rettberg (2008)

Anexo 4: Costes directos e indirectos provocados por el secuestro, 1996-2003

Tipo de costo	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTAL
<b>Costos directos</b>									
Gasto del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro y la extorsión	25.019,8	30.289,9	27.776,9	31.272,9	47.197,3	36.442,1	57.552,9	63.257,2	318.809,0
Pago de rescates	30.634,5	16.507,6	35.703,8	23.338,3	20.150,8	12.765,4	18.574,1	5.035,1	162.709,6
<b>Subtotal directos</b>	<b>55.654,3</b>	<b>46.797,5</b>	<b>63.480,7</b>	<b>54.611,2</b>	<b>67.348,2</b>	<b>49.207,5</b>	<b>76.126,9</b>	<b>68.292,3</b>	<b>481.518,6</b>
<b>Costos indirectos</b>									
Pérdida de capital humano asociada con el tiempo de cautiverio de secuestrados	3.989,9	15.197,4	27.799,8	20.133,5	39.796,3	15.617,9	12.043,9	3.308,0	137.886,6
Pérdida de capital humano asociada con muerte temprana de los secuestrados	1.756,9	21.152,6	30.246,6	19.202,9	21.753,0	14.220,1	10.606,6	9.867,0	128.805,8
<b>Subtotal indirectos</b>	<b>5.746,9</b>	<b>36.350,0</b>	<b>58.046,4</b>	<b>39.336,3</b>	<b>61.549,2</b>	<b>29.838,0</b>	<b>22.650,5</b>	<b>13.175,0</b>	<b>266.692,4</b>
<b>Gran total</b>	<b>61.401,2</b>	<b>83.147,6</b>	<b>121.527,1</b>	<b>93.947,5</b>	<b>128.897,4</b>	<b>79.045,5</b>	<b>98.777,4</b>	<b>81.467,4</b>	<b>748.211,1</b>

Fuente: Álvarez y Rettberg (2008)

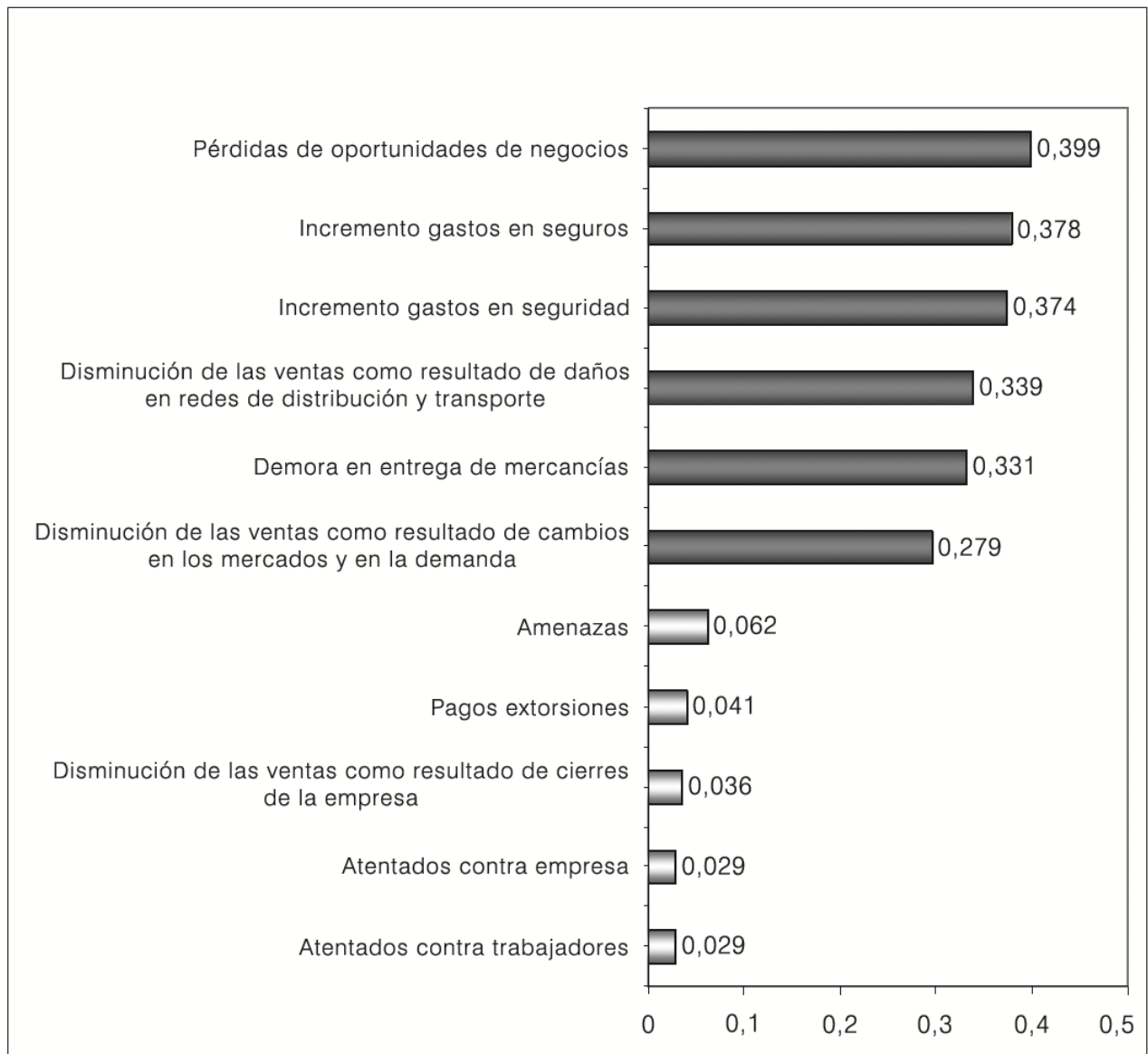
Anexo 5: Inversión Extranjera Directa en Colombia 2012-2017



Fuente: Limas y Franco (2018)

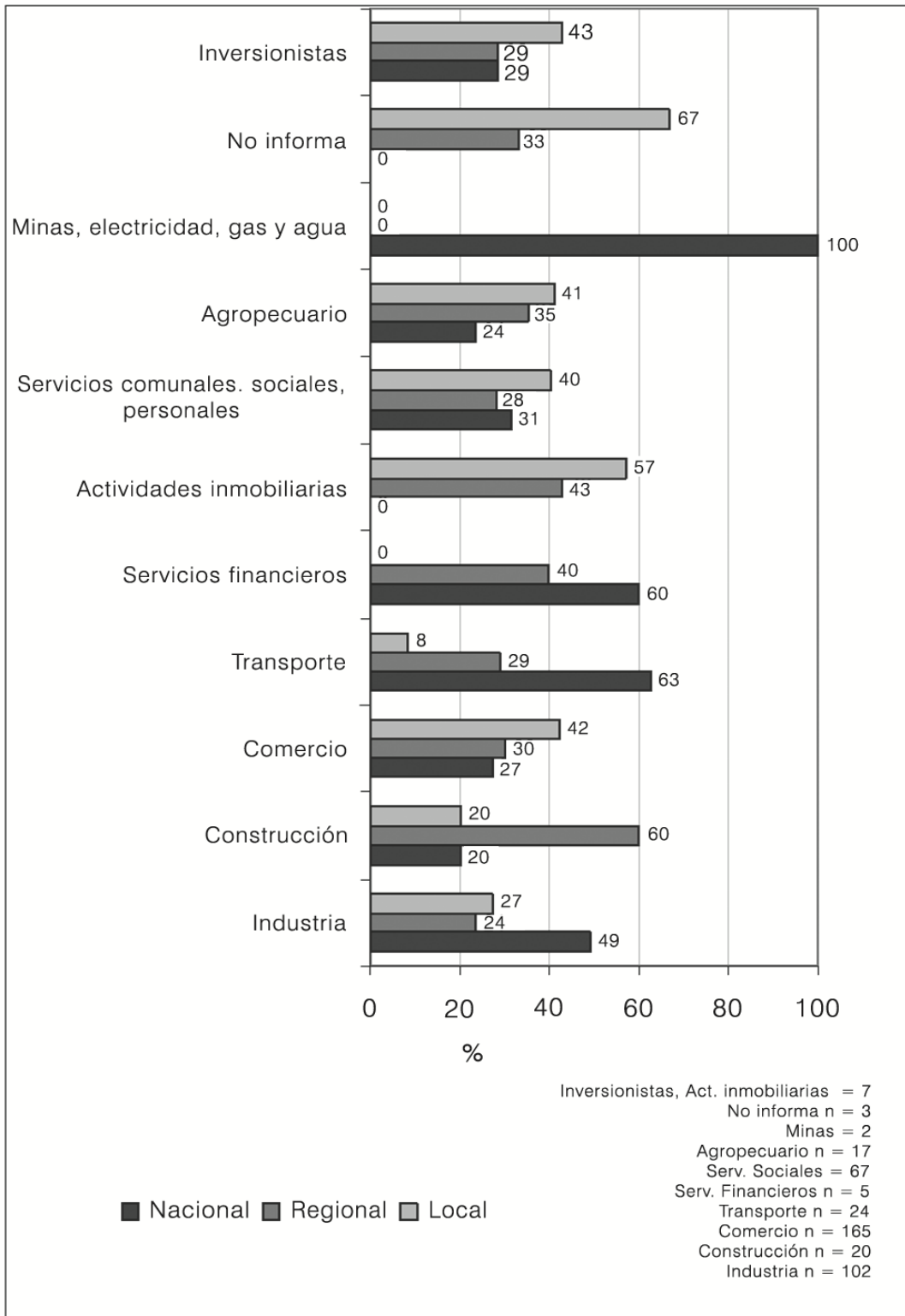


Anexo 6: Costes indirectos (barras oscuras) y directos (barras claras) a los que se enfrentan las empresas



Fuente: Rettberg (2008)

Anexo 7: Pérdida de oportunidades de negocios, según sector y nivel de operaciones



Fuente: Rettberg (2008)

Anexo 8: Principales impactos económicos del lavado de activos en la actividad económica

Distorsión de los agregados y fundamentales de la economía	Altera los precios relativos de los mercados al posibilitar la venta de productos a precios artificialmente bajos o realizar compras a precios por encima del de mercado.
	Distorsiona las mediciones oficiales de las entidades públicas.
	Desequilibra los instrumentos macroeconómicos (como la tasa de cambio y la tasa de interés), debido al reintegro de divisas no contabilizadas por la autoridad monetaria, la compra de bienes a crédito a tasas no competitivas y la oferta ilegal de dinero para préstamo.
Distorsión de la actividad económica legal	Disminuye los incentivos para invertir y aumenta los costos por concepto de seguridad.
	Fomenta la competencia desleal en las diferentes industrias de la economía.
	Distorsiona los incentivos dentro del mercado legal (salarios, tasas de ganancia y costos de financiamiento).
	Disminuye la productividad total de la economía, al relocalizar recursos productivos (capital y trabajo) en actividades ajenas al sector legal.

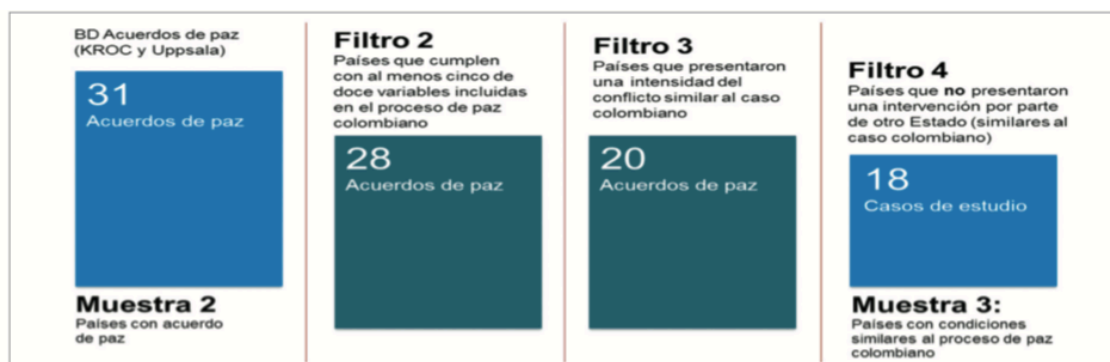
Fuente: DNP, 2019

Anexo 9: Selección de la primera muestra de países



Fuente: Gaviria et al., 2017

Anexo 11: Selección de la segunda y tercera muestra de países



Fuente: Gaviria et al., 2017

Anexo 10: Países con condiciones similares al caso colombiano

País	Fecha
Bangladés	Dic/97
Camboya	Oct/91
Filipinas	Sep/96
India	Feb/93
Irlanda del Norte (Reino Unido)	Abr/98
Macedonia	Ago/01
Níger	Abr/95
Ruanda	Ago/93
Sudáfrica	Nov/93
Burundi	Ago/00
Costa de Marfil	Mar/07
Guatemala	Dic/96
Indonesia	Ago/05
Liberia	Ago/03
Malí	Abr/92
Papúa-Nueva Guinea	Ago/01
Senegal	Dic/04
Yibuti	May/01

**Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Colombia.**

Fuente: Gaviria et al., 2017